Certeza moral en las causas penales, algunos obstáculos que se pueden presentar para alcanzarla

Some Obstacles to the Establishment of Moral Certitude in Criminal Cases

RECIBIDO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021 / ACEPTADO: 27 DE OCTUBRE DE 2021

Rafael RODRÍGUEZ-OCAÑA

Profesor Ordinario de Derecho Procesal Canónico
Universidad de Navarra. Facultad de Derecho Canónico. Pamplona
orcid 0000-0002-8195-2577
rrodoca@unav.es

Resumen: En estas páginas apunto algunas de las dificultades que pueden presentarse al juez en la consecución de la certeza moral en las causas penales, e intento ofrecer soluciones desde la misma certeza moral que, como fin, punto central o clave de lectura, ilumina el camino procesal hacia la sentencia justa.

Palabras clave: Certeza moral, Proceso penal, Sentencia condenatoria o absolutoria, Pruebas *ex officio*, Valoración de la prueba, Informaciones privadas, *in dubio pro reo*.

Abstract: This paper outlines a number of obstacles facing the judge in establishing moral certitude in criminal cases. The aim is to offer solutions based on moral certitude (as an end in itself or a key reference point) to shed light on the procedural process towards a just sentence.

Keywords: Moral Certitude, Penal Process, Guilty Sentence or Acquittal, Proof *ex officio*, Appraisal of Evidence, Private Information, *in dubio pro reo*.

SUMARIO: 1. Pretensión de racionalidad y verdad en el proceso penal. 2. La certeza moral como pretensión de racionalidad y verdad. 2.1. *De-sechar toda duda positiva de error; la experiencia del juez y las negaciones del acusado*. 2.1.1. *Plantearse la duda*. 2.1.2. *El conocimiento experiencial del juez*. 2.1.3. *Negaciones del reo y petición de explicación de sus actos*. 2.2. *Las pruebas ex officio y la imparcialidad del juez*. 2.3. *La valoración de la prueba*. 2.4. *Informaciones privadas, secreto y conocimiento privado del juez*. 2.4.1. *Interdicción de las informaciones privadas al juez*. 2.4.2. *Pruebas secretas*. 2.4.3. *Influencia de la ciencia privada del juez en la sentencia penal*. 3. Pronunciamientos de la sentencia. 3.1. *Certeza moral para condenar y declarar la inocencia*. 3.2. *Sentencia absolutoria y presunción de inocencia*. 4. Conclusión.

E A. McCarthy escribió en 1948 que el punto central y síntesis de todo el derecho procesal canónico era la certeza moral que el juez debe alcanzar¹. Años más tarde, Grocholewski, inspirado en esa idea, dirá que la certeza moral es una importante clave de lectura de las normas procesales². Punto central, clave de lectura, sugieren que la certeza moral está presente a lo largo de todo el itinerario procesal como el fin está presente en el inicio de la acción y en la elección de los medios más idóneos para alcanzarlo. En efecto, la certeza moral informa, en ese sentido, la actuación del juez en el proceso y aporta los criterios para la elección de los medios idóneos para lograrla.

En estas páginas apunto algunas de las dificultades que pueden presentarse al juez en la consecución de la certeza moral en las causas penales, e intento ofrecer soluciones precisamente desde la misma certeza moral que, como fin, punto central o clave de lectura, ilumina el camino procesal hacia la sentencia justa.

Con un previa observación acerca de cómo entienden los ordenamientos seculares la pretensión de racionalidad y verdad garante de la justicia en los procesos penales, analizaremos, bajo esa perspectiva, la noción canónica de certeza moral en la *quaestio facti* y algunos de los obstáculos

¹ Cfr. E. A. MCCARTHY, *De certitudine morali quae in iudicis animo ad sententiae pronuntiationem requiritur*, Officium Libri Catholici, Roma 1948, 3.

² Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali*, Ius Ecclesiae 9 (1997) 449.

que se pueden presentar a la hora de conjugar el juicio personal sobre la certeza y su fundamentación objetiva, la necesidad de desechar la duda positiva de error, la valoración de la prueba, etc. Termina el artículo con un apartado dedicado a los diversos pronunciamientos que puede tener la sentencia en los procesos penales en función de la certeza moral requerida por el c. 1608.

1. PRETENSIÓN DE RACIONALIDAD Y VERDAD EN EL PROCESO PENAL

Ha escrito Bianchi que el servicio a la verdad en el proceso matrimonial canónico se puede entender en diferentes sentidos: como verdad de *hecho*, es decir, que corresponde a la real sucesión de hechos puestos a examen judicial; como verdad *doctrinal*, que debe ser respetada en la decisión; como verdad del contenido *jurídico*, que enmarca la historia matrimonial en el contexto de la disciplina canónica; y como verdad orientada a la *salvación de las almas*³.

El proceso penal presta también un servicio a la verdad. Ante todo el tribunal debe buscar la verdad material de los hechos reprobables y la atribución de su responsabilidad. Hechos que pertenecen al pasado, que el tribunal desconoce y que deben trasladarse al proceso mediante los medios de prueba para que los jueces descubran la verdad histórica con certeza moral. En el proceso penal se produce, por consiguiente, un aporte de materiales procedentes de la misma historia humana en la que se originaron los supuestos hechos delictivos y que en su versión formal los plasma el promotor de justicia, para que sea corroborada con el traslado de las huellas históricas que han dejado los acontecimientos. Se trata de recrear la imagen de la realidad acontecida sobre la que el tribunal habrá de emitir su sentencia.

La composición de imagen de la realidad fáctica no se puede formar a cualquier precio. La búsqueda de la verdad material bajo el preterito modelo inquisitorio ha sido ampliamente superada. Es cierto que el actual sistema procesal canónico tiene notas inquisitorias⁴, pero están

³ Cfr. P. BIANCHI, *Il servizio alla verità nel processo matrimoniale*, Ius Canonicum 57 (2017) 85-88.

⁴ Cfr. C. DE DIEGO-LORA – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Lecciones de Derecho Procesal Canónico. Parte general*, 2.ª ed., Eunsa, Pamplona 2020, 346-352.

«plenamente en consonancia con la justicia y el derecho a un juicio justo»⁵. La presunción de inocencia (ahora explícitamente acogida en el nuevo c. 1321 § 1⁶), el derecho al proceso justo⁷, el *favor rei*, la independencia del tribunal, el derecho de defensa que requiere el conocimiento de la acusación, las pruebas pertinentes y lícitas (c. 1527 § 1), etc., son garantías procesales que certifican una actuación del tribunal respetuosa con la justicia en la búsqueda de la verdad. Es importante la búsqueda de la verdad material en el proceso penal, porque la verdad se presenta como criterio que legitima el ejercicio del *ius puniendi* en el caso concreto⁸. Si no fuera así, ¿qué finalidad tendría un proceso penal?

La verdad fáctica que puede alcanzar el juez es la que llama la doctrina verdad como correspondencia, «ante enunciados que afirman la existencia de hechos (...) el juez debe establecer la correspondencia del enunciado con la realidad del hecho que se está describiendo. De hecho, para esto sirven las pruebas, tanto en el proceso como en cualquier otro ámbito de la experiencia»⁹.

Dos son las razones por las que este concepto de verdad resulta adecuado desde el punto de vista procesal: a) si el supuesto fáctico de la norma no se ha producido en realidad, la norma no se puede aplicar y si se hiciera, la sentencia puede ser considerada injusta; b) las pruebas no tienen por finalidad producir narraciones, sino aportar vestigios de los hechos que se produjeron en la realidad¹⁰. Esta concepción de la verdad procesal como correspondencia es válida para todo tipo de hecho que el

⁵ J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, Ius Ecclesiae 16 (2004) 375.

⁶ C. 1321 § 1: «Toda persona es considerada inocente mientras no se pruebe lo contrario». Cfr. FRANCISCO, Const. ap. *Pascite gregem Dei* con la que se reforma el Libro VI del Código de Derecho Canónico, 23-V-2021, L'Osservatore Romano, 1-VI-2021, 2-4. La citaremos en adelante como PGD.

⁷ Cfr. J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Archivio Giuridico «Filippo Serafini» 232 (2012) 165-224 (parte prima); 293-357 (parte seconda).

⁸ «El binomio verdad-justicia es recurrente en el lenguaje común y –se podría decir– que, en el inconsciente colectivo, asume que los dos términos están estrechamente conectados»: M. TARUFFO, *Simply la verdad. El Juez y la reconstrucción de los hechos*, Marcial Pons, Barcelona 2010, 115.

⁹ M. TARUFFO, *Algunas consideraciones sobre la relación entre prueba y verdad*, Discusiones: prueba y conocimiento 3 (2003) 39: <https://bit.ly/3s4Mpu8>. Última consulta, 1-IX-2021.

¹⁰ Cfr. *ibid.*

juez debe verificar¹¹. Las pruebas, en el proceso penal, por tanto, no son instrumentos de persuasión, sino medios de conocimiento, representan ante el juez los hechos que deberán ser corroborados en el proceso; mediante las pruebas se acredita la veracidad o la falsedad de las afirmaciones de parte, es decir, se conocen los hechos en los que esas afirmaciones se asientan. Al tribunal penal le interesa conocer qué aconteció, cómo y quién es el autor o responsable. El problema, además de los medios existentes para reproducir en el foro la imagen de lo acontecido, es la pretensión de racionalidad y verdad que debe presidir la decisión del juez.

Esa pretensión de racionalidad y verdad es una aspiración de todo proceso penal. En la actualidad, si bien se afirma como presente, se constata al mismo tiempo que el término verdad y su alcance presentan problemas para los estudiosos¹², hasta tal punto que algunos autores se han preguntado, haciendo propuestas concretas, cuántos culpables equivalen a un inocente¹³, es decir, dado que no se puede tener la seguridad de condenar al culpable, qué error puede considerarse aceptable. Algunas de las propuestas¹⁴ no dejan de sorprender, desde la perspectiva de la presunción de inocencia y del principio de igualdad.

La cuestión la vemos planteada muchos siglos antes más correctamente en la Biblia, durante el “forcejeo” de Abraham con YHWH acerca de cuántos inocentes eran necesarios para salvar a las ciudades de Sodoma y Gomorra del castigo divino. La cuenta regresiva se para en diez inocentes (Gn 18,23-33). En Ex 32 se relata el episodio del becerro de oro. Moisés intercede ante YHWH que no castiga a su pueblo severamente¹⁵, posiblemente porque algunos no cayeron en el pecado de idolatría¹⁶.

La necesidad de buscar un criterio de racionalidad ha conducido a algunos sistemas procesales a optar por la probabilidad como base de la inferencia probatoria, experimentada primero en los procesos conten-

¹¹ Cfr. *ibid.*, 40.

¹² Cfr. M. ZAMORA-ACEBEDO, *La búsqueda de la verdad en el proceso penal*, Acta Académica 54 (2014) 151-152.

¹³ Cfr. M. A. SANCINETTI, *Testimonio único y principio de la duda*, InDret 3 (2013) 3-6: <https://bit.ly/3e8xnwD>. Última consulta, 1-IX-2021.

¹⁴ Cfr. *ibid.*, donde se citan las propuestas de Fortescue (1 por 20), Blackstone (1 por 10), Lord Hale (1 por 5).

¹⁵ Servir a otros dioses estaba castigado con la muerte, cfr. Dt 13,7-17.

¹⁶ Otros diálogos parecidos cfr. Nm 21,4-9; Am 7, 1ss.; Jr 14,19ss.

ciosos para trascender después a los criminales por medio del criterio de la probabilidad cuantitativa¹⁷. Los criterios de *prior probability* con el de *preponderance of evidence* (en el ámbito civil) y de *beyond a reasonable doubt* (en el criminal) han derivado en un tipo de razonamiento judicial, nacido en USA y extendido por Alemania y Suecia, fundado en la probabilidad cuantitativa¹⁸ (objetiva¹⁹ y subjetiva²⁰) basada en el uso de modelos matemáticos de cálculo de probabilidades, en especial el modelo bayesiano²¹, como pauta para el razonamiento judicial. El modelo bayesiano es especialmente tentador para la pretensión de racionalidad y verdad en los procesos penales, porque ofrece un modelo teórico en ámbitos de incertidumbre donde se desconoce la verdad o falsedad de los hechos, o estos admiten diversas interpretaciones. Como señala un autor se ha terminado convirtiendo en una especie de ortodoxia teórica, sobre todo en el ámbito estadounidense²².

¹⁷ «De este modo, fácilmente los jueces seculares, tanto de los países del *civil law* como del *common law*, pueden caer en el error de formar su convicción judicial estimando por cierto aquello que tan solo es probable, por mucho que pueda concluirse lógicamente que la probabilidad de que el hecho controvertido haya sucedido sea la denominada “máxima probabilidad”, obtenida atendiendo al expediente de la *beyond a reasonable doubt*, que es el más conocido criterio de valoración probatoria de los países del *common law* en el ámbito del enjuiciamiento criminal»: T. J. ALISTE SANTOS, *Relevancia del concepto canónico de “certeza moral” para la motivación judicial de la “quaestio facti” en el proceso civil*, *Ius Ecclesiae* 22 (2010) 653.

¹⁸ Suele ponerse como ejemplo de la probabilidad cuantitativa el proceso de *El Pueblo versus Collins*, sucedido en Los Ángeles en 1964, cfr. T. J. ALISTE SANTOS, *Relevancia del concepto...*, cit., 656. Cfr. V. ROHATGI, *Statistical Inference*, Dover Publications, New York 2003, 65 y ss.

¹⁹ «La probabilidad cuantitativa objetiva centra sus esfuerzos principalmente en la frecuencia con que un determinado hecho, estimado cierto, puede verificarse dentro de una serie de fenómenos, y constituye la base del razonamiento estadístico»: T. J. ALISTE SANTOS, *La «certeza moral» como criterio fundamental de racionalidad judicial probatoria*, *Academia & Derecho* 2 (2011) 40.

²⁰ «En la llamada probabilidad subjetiva el objeto de atención no es la frecuencia de un determinado hecho sino la verificación de ese hecho en sí mismo considerado»: *ibíd.*

²¹ Cfr. T. J. ALISTE SANTOS, *La «certeza moral»...*, cit., 39-40. Cfr. J. S. VERA SÁNCHEZ, *La discrecionalidad judicial en dos enfoques reglados de la valoración de la prueba penal*, *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid* 30 (2014) 247-269; P. TILLERS – E. GREEN (eds.), *Probability and Inference in the Law of Evidence: the uses and limits of Bayesianism*, *Boston Studies in the Philosophy and History of Science*, n. 109, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London 1988.

²² Cfr. M. GASCÓN ABELLÁN, *Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba*, Marcial Pons, Madrid 2010, 145 y ss.

La ciencia estadística defiende la utilidad de sus métodos y explica cómo pueden aplicarse en la resolución de casos judiciales²³. Se admite que, entre las dos posibilidades de error existentes en un caso judicial, condenar al inocente se debe evitar a toda costa, pero sin caer en el otro error, no condenar al culpable. Entre ambas opciones debe existir un equilibrio, que se sitúa en el 5%, sin que exista una razón matemática que lo fundamente, es pura convención²⁴. Pero no todos los casos son iguales, se estima más grave el error en resoluciones que afecten a la privación de la libertad que a decisiones que condenan, por ejemplo, al pago de una pequeña cantidad pecuniaria. Estas diferencias son tenidas en cuenta en la teoría bayesiana. «En cada caso habría que utilizar una valoración adecuada de la *pérdida* para cada uno de los errores. Esta medida de la pérdida, junto con la información a priori y los datos, derivarán después de algunos cálculos en una medida del riesgo para cada uno de los errores posibles. Obviamente la decisión a tomar será la que tenga un menor riesgo»²⁵. En el fondo, en todos los casos, cabe la posibilidad de condenar a un inocente aunque la probabilidad matemática de que ocurra fuera considerada muy baja. La presunción de inocencia en todo caso quedaría en entredicho, por pequeña que fuera la probabilidad de condena de un inocente.

En el derecho de la Iglesia, con una tradición jurídica de siglos, como criterio de racionalidad y verdad se acogió la certeza moral, más respetuoso con los principios de presunción de inocencia e igualdad. El magisterio papal lo propone como camino para la justicia secular²⁶.

2. LA CERTEZA MORAL COMO PRETENSIÓN DE RACIONALIDAD Y VERDAD

La expresión certeza moral «no fue utilizada ni por Graciano, ni en las Decretales, ni en la doctrina del periodo clásico aunque la idea que en ella subyace fuera común a los canonistas de la época. Fue Tomás Sánchez quien la utilizó por primera vez, tomándola de los moralistas,

²³ Cfr. J. LÓPEZ FIDALGO, *El azar no existe*, Electrolibris, Murcia 2015, 83-90, 131-141.

²⁴ *Ibíd.*, 88.

²⁵ *Ibíd.*, 136-137.

²⁶ Cfr. Pío XII, *Nuntia iis qui interfuerunt VI^o Conventui nationali Sodalium Consotiationis ex iuris peritis catholicis Italiae*, 5-X-1954, AAS 47 (1955) 65-66.

generalizándose su empleo en el siglo XIX, tanto en documentos oficiales como en las decisiones de la Rota y de la S.C. del Concilio»²⁷.

La concepción de la certeza moral variará en su interpretación, con el transcurso del tiempo, de opiniones cercanas a la certeza física a posturas más abiertas en el ámbito curial²⁸. Con la aparición del CIC 17 (c. 1869) y de la instr. *Provida Mater* (art. 197) no desaparecen totalmente las diferencias de criterios entre los autores. Será Pío XII, en dos discursos a la Rota Romana²⁹, el que analizará la expresión codicial y establecerá las distancias entre ambas posiciones doctrinales. Algunos autores echaron en falta, sin embargo, que el Papa no se refiriera también a la certeza moral en la *quaestio iuris*³⁰.

El c. 1608 § 1 cuenta con el magisterio de Pío XII y de Juan Pablo II³¹ como referencia a la hora de estudiar la certeza moral y para aclarar que la sola probabilidad, por alta que sea, no basta para dictar sentencia. Estas enseñanzas quedan recogidas en el art. 247 § 2 DC³². Para alcanzar la certeza moral en el ánimo del juez «no basta el peso prevalente de las pruebas y de los indicios, sino que se requiere también que se excluya cualquier prudente duda positiva de error, tanto en cuanto al

²⁷ R. NAVARRO-VALLS, *Los fundamentos de la sentencia canónica*, Ius Canonicum 15 (1975) 322-323. Cfr. Th. SÁNCHEZ, *De sancto matrimonii sacramento disputationum*, tomi tres, t. I, apud Benedictum Milochum, Venetiis 1672, lib. II, disp. 45, n. 4, 173. Para la historia del término, cfr. E. A. MCCARTHY, *De certitudine morali...*, cit.; J. LLOBELL, *Historia de la motivación de la sentencia canónica*, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Zaragoza 1985, 62-71; Z. GROCHOLEWSKI, *La certezza morale...*, cit., 423-428; M. J. ARROBA CONDE, *Convincimento, certezza e motivazione: l'esperienza canonica*, Criminalia 7 (2012) 168-169.

²⁸ Cfr. R. NAVARRO-VALLS, *Los fundamentos...*, cit., 322-327.

²⁹ Cfr. Pío XII, *Allocuzione alla Rota Romana*, 1-X-1942, AAS 34 (1942) 338-343; IDEM, *Allocuzione alla Rota Romana*, 3-X-1941, AAS 33 (1941) 421-426.

³⁰ Cfr. O. GIACCHI, *La certezza moral nel giudizio ecclesiastico*, en PONTIFICIA UNIVERSITAS GREGORIANA, *Ius Populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor*, vol. II, Università Gregoriana, Roma 1972, 611 y ss.; R. NAVARRO-VALLS, *Los fundamentos...*, cit., 326-327. Más modernamente, J. LLOBELL, *La certezza morale sulla «quaestio facti» e sulla «quaestio iuris» de nelle cause di nullità del matrimonio quale istituto assiologico trascendente l'istr. «Dignitas connubii»*, Ius Ecclesiae 27 (2015) 479-481.

³¹ Cfr. JUAN PABLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 4-II-1980, AAS 72 (1980) 172-178.

³² Cfr. PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS TEXTOS LEGISLATIVOS, Intr. *Dignitas connubii* que deben observar los tribunales diocesanos e interdiocesanos al tratar las causas de nulidad de matrimonio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005. Se citará como DC.

derecho como en cuanto a los hechos, aunque no quede eliminada la mera posibilidad de lo contrario»³³.

El papa Francisco ha hecho suya esta concepción de la certeza moral dándole rango legal, con la inclusión del texto del art. 247 § 2 DC en el art. 12 de las «Reglas de procedimiento para tratar las causas de nulidad de matrimonio» que acompañan a las nuevas normas promulgadas mediante el Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*³⁴.

En el proceso penal la exigencia de la certeza moral viene reclamada por el c. 1608 e indirectamente por el c. 1726; para los procedimientos administrativos penales también se requiere a tenor del c. 1720, 3.º, aunque esa norma solo habla de certeza, el c. 1342 § 1 del nuevo libro VI CIC deja claro que cuando «justas causas dificultan hacer un proceso judicial, la pena puede imponerse o declararse por decreto extrajudicial, observando el c. 1720, especialmente por lo que respecta al derecho de defensa y a la certeza moral en el ánimo de quien da el decreto conforme al c. 1608»³⁵.

Sobre la certeza moral enseñó Juan Pablo II que «Pío XII declaró de modo auténtico el concepto canónico de certeza moral en la alocución dirigida a vuestro tribunal el 1 de octubre de 1942»³⁶. La certeza moral de la que aquí se habla es judicial³⁷, y aunque la doctrina la distingue de la certeza como concepto de orden filosófico y moral, conviene sin embargo tener presente que, siendo planos diversos, están conectados entre sí, pues la certeza en todos los casos es el conocimiento

³³ El concepto de certeza amoral de Juan Pablo II deroga definitivamente la «certeza prevalente» de las Normas USA de 1970, cfr. J. LLOBELL, *El valor jurídico de la instr. "Dignitas connubii", su recepción eclesial, el objeto y la conformidad de la sentencia, y la certeza moral*, en R. RODRÍGUEZ-OCAÑA – J. SEDANO, *La instr. «Dignitas connubii» sobre los procesos de nulidad matrimonial*, Actas del XXIV Curso de Actualización en Derecho Canónico de la Facultad de Derecho Canónico (Pamplona, 24-26 octubre de 2005), 2.ª ed., Eunsa, Pamplona 2007, 280.

³⁴ Cfr. FRANCISCO, Carta apostólica en forma de Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* sobre la reforma del proceso canónico para las causas de declaración de nulidad del matrimonio en el Código de Derecho Canónico, 15-VIII-2015, AAS 107 (2015) 958-970.

³⁵ El subrayado es nuestro.

³⁶ JUAN PABLO II, *Allocuzione alla Rota* (1980)..., cit., n. 6, in fine.

³⁷ Cfr. D. MOGAVERO, *I pronunciamenti del giudice*, en GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura), *I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale*, XXIV Incontro di studio Villa Luzzago-Ponte di Legno (BSD), 30 giugno-4 luglio 1977, Glossa, Milano 1998, 162.

seguro y claro de algo. Es uno de los criterios de conocimiento de la verdad y llamamos verdad a la conformidad de las cosas con el concepto que forma la mente sobre lo conocido³⁸. La certeza moral, en consecuencia, es el criterio que el juez tiene para resolver como ajustada a la verdad la pretensión de tutela que se le solicita. La verdad como tal está en el entendimiento³⁹ y este tiene capacidad para alcanzarla⁴⁰. Es la verdad como adecuación, que debe buscar el juez, para luego dar un paso más, importante desde el punto de vista judicial, que se concreta en la *manifestación* de esa verdad alcanzada; es la *locutio intellectus* expresiva de la verdad encontrada⁴¹ de la que se deja constancia en la motivación de la sentencia.

La certeza judicial, siguiendo a Pío XII, se distingue así tanto de la certeza absoluta⁴² –que no deja ninguna posibilidad de error ni de duda acerca de la verdad del hecho–, como de la probabilidad, que no ofrece una razón suficiente acerca de la objetiva verdad de los hechos, por no excluir toda duda razonable. Así lo explicaba el Papa: «Entre certeza absoluta y cuasi-certeza o probabilidad está como entre dos extremos la *certeza moral*, de la que de ordinario se trata en las cuestiones sometidas a vuestro foro... Del lado positivo, esta se caracteriza por el hecho de

³⁸ Cfr. TOMÁS DE AQUINO, *Q. D. De veritate*, q. 1, a. 1, co.

³⁹ “Adhesio mentis”, con esos términos comienza la definición de certeza que proponía McCarthy y Staffa hacía suya en una sentencia rotal, de las que se hace eco Z. GROCHOLEWSKI, *La certeza morale...*, cit., 430 y nt 41; E. A. MCCARTHY, *De certitudine morali...*, cit., 66-68; *coram* STAFFA, Ianuen., 3-VI-1949, en SACRAE ROMANAE ROTAE DECISIONES SEU SENTENTIAE, XLI, Typis Polyglottis Vaticanis 1959, 259, n. 2.

⁴⁰ Cfr. JUAN PABLO II, Carta enc. *Fides et ratio* a los Obispos de la Iglesia Católica sobre las relaciones entre fe y razón, 14-IX-1998, AAS 91 (1999) 5-88.

⁴¹ Cfr. L. POLO, *La persona humana y su crecimiento*, en IDEM, *Obras completas de Leonardo Polo*, serie A, vol. XIII, Eunsa, Pamplona 2015, 134, nt. 3.

⁴² La certeza absoluta, desde el punto de vista jurídico, se ha entendido por algunos como la certeza alcanzada por la presencialidad de los hechos, porque los ha conocido directamente, sin mediación. En realidad, esa certeza absoluta no se da: «Aquel a quien resulten familiares los principios más elementales de la fisiología de los sentidos, aún sin “especiales conocimientos”, será el que menos comparta la infantil creencia en la “certeza” producida por la propia percepción ocular. Ningún apoyo es más débil que la propia percepción sensorial y aunque en el campo del pensamiento se quiera admitir la “certeza” como resultado posible, en el de la sensación, en el de la prueba histórica, no existe en absoluto tal certeza»: F. STEIN, *El conocimiento privado del juez: investigaciones sobre el derecho probatorio en ambos procesos*, Eunsa, Pamplona 1973, 40.

excluir toda duda fundada o razonable, y considerada así se distingue esencialmente de la cuasi-certeza mencionada; por el lado negativo, deja en pie la posibilidad absoluta de su contrario, y en ello se diferencia de la certeza absoluta. La certeza de que hablamos ahora es necesaria y suficiente para dictar una sentencia»⁴³.

«No es ciertamente una certeza al estilo de la física o de la metafísica, como tampoco puede confundirse con una mera probabilidad, o, como ha señalado algún procesalista, una pura convicción psicológica; debe apoyarse en las leyes lógicas y éticas partiendo siempre de esos datos objetivos que son las alegaciones de partes y las pruebas aportadas al proceso, sea por iniciativa de las partes, sea de oficio por el juez, apoyándose en ellos»⁴⁴. La certeza moral, para su correcta formación en el intelecto del juez, debe basarse en motivos objetivos. Aunque la verdad se forma en el entendimiento, no es puramente subjetiva, no la crea el juez, ni está «basada en el sentimiento o la opinión meramente subjetiva de este o aquel, quizás incluso en la credulidad personal, la irreflexión, la inexperiencia»⁴⁵. Como ha señalado la doctrina penal no basta una grave presunción de culpabilidad en las causas penales, esta no es suficiente para dictar sentencia condenatoria⁴⁶.

Por eso el c. 1608 § 2 prescribe que «el juez ha de conseguir esta certeza de lo alegado y probado». Esta exigencia es muy importante en los procesos penales cuando los delitos de los que se acusa al reo son especialmente reprobables y pueden suscitar en el tribunal que los juzga un sentimiento de rechazo. Más específicamente se prohíbe al juez apoyarse en informaciones que no han sido adquiridas por el proceso (cfr. c. 1604 § 1)⁴⁷. Cualquiera que sea el origen o procedencia de la información que maneja el juez, siempre se necesita, para que se incorpore al proceso, de la decisión judicial, es decir, del decreto de admisión de

⁴³ Pío XII, *Allocuzione alla Rota* (1942)..., cit., 339-340, n. 1.

⁴⁴ C. DE DIEGO-LORA, *sub c. 1608*, en A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, IV/2, 3.^a ed., Eunsa, Pamplona 2002, 1539. En adelante se citará como ComExe, seguido del volumen y páginas correspondientes.

⁴⁵ Pío XII, *Allocuzione alla Rota* (1942)..., cit., 340, n. 3.

⁴⁶ Cfr. V. PALESTRO, *Le sentenze penali della Rota Romana (1909-1996)*, en Z. SUCHECKI (ed.), *Il processo penale canonico*, Lateran University Press, Roma 2003, 336.

⁴⁷ Cfr. R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *sub c. 1604*, ComExe, IV/2, 1511-1513.

la prueba y de todos aquellos decretos judiciales subsiguientes que se requieran para la recta ordenación y práctica de dicha prueba, que son garantía del contradictorio. Una vez admitida y practicada esa información queda incorporada al proceso, deja de pertenecer a la parte proponente, y pasa a ser adquirida por el proceso mismo. Es lo que se ha llamado *principio de adquisición de pruebas*⁴⁸. Una adquisición de carácter objetivo que se produce por el hecho de su incorporación, una vez practicada, al *dossier* (acta) documental del proceso. «Si el juez desea alcanzar una información mayor de lo que las partes litigantes le aporten, el CIC le concede el poder de ordenar *ex officio* pruebas conforme a lo establecido en el c. 1452; pruebas que, para que puedan influir en la certeza moral, requerirán de su práctica y constatación bajo fe pública en el proceso (c. 1437)»⁴⁹.

2.1. *Desechar toda duda positiva de error; la experiencia del juez y las negaciones del acusado*

2.1.1. *Plantearse la duda*

La certeza moral no se basa en una secuencia de hechos descritos por los jueces y atribuibles al reo con la que se manifiesta la convicción alcanzada por el tribunal acerca de los hechos constitutivos de delito y su imputabilidad. El concepto de certeza moral, al que en este tipo de causas penales va íntimamente unido el de presunción de inocencia⁵⁰, requiere que el tribunal manifieste su certeza con ausencia de toda duda positiva de error. Duda fundada es la que pudiera hallar fundamentación en las actas. Su ausencia puede provenir porque el tribunal asentó objetivamente su certeza sin encontrar otras razones objetivas que la contravinieran, es lo que prescribe el legislador. Pero la falta de duda positiva de error puede derivar también –en este caso de modo inadmi-

⁴⁸ Cfr. C. DE DIEGO-LORA – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Lecciones de Derecho...*, cit., 418.

⁴⁹ C. DE DIEGO-LORA, *sub c. 1608*, ComExe, IV/2, 1539.

⁵⁰ Cfr. K. PENNINGTON, *Innocente fino a prova contraria: le origini di una massima giuridica*, en D. CITO (ed.), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè editore, Milano 2005, 33-61; A. S. SÁNCHEZ-GIL, *El principio 'in dubio pro reo' en el derecho penal canónico. La permanente actualidad de una antigua regla jurídica*, *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, n. 5, mayo de 2004. Revista telemática, <https://bit.ly/3gmlJkB>. Última consulta, 1-IX-2021.

sible— porque al tribunal le bastó la mera convicción subjetiva de que lo acontecido tuvo que haber pasado; sus dudas fueron resueltas, en efecto, porque debiendo planteárselas no lo hicieron. El problema no es que no dudaran, sino que habiendo debido dudar, sin embargo, lo obviaron, viciando así la certeza moral y, por ende, violando la presunción de inocencia.

El tribunal tiene que alcanzar la certeza moral sobre ambas *quaestiones, facti et iuris*, que imputan al reo como fundamento de la condena. Esa certeza debe ser objetiva, para superar la pura estimación de conciencia. De tal modo que al motivar su decisión, lo probado en juicio y la convicción alcanzada pueda justificarse siguiendo los parámetros de la lógica argumental, con el fin de superar la mera impresión que los medios probatorios hayan podido estampar en el ánimo del juez, mereciendo la adhesión de los demás que accedan a dicha argumentación. El relato de la víctima puede transmitir credibilidad, pero la certeza moral, es decir, la verdad de la existencia del delito y su imputabilidad, no puede dar cabida a intuiciones voluntaristas, por las que el juez “anticipa la verdad”, lo que le impide plantearse cualquier duda posible.

Decía Guasp que la sentencia es el resultado de una convicción psicológica alcanzada por el juez en la que entran, además de cuestiones lógicas, impresiones, creencias, e incluso actos típicos de voluntad⁵¹. Siendo en parte verdad esa opinión, sin embargo «todos esos elementos, que pueden marcar con su impronta, cargada de subjetividad, una sentencia, no dejan de ser elementos espurios de ella, y que debe someterlas el propio juez al tamiz del juicio crítico conducente a la serenidad que es garantía, entre otras cosas, para el conocimiento verdadero del objeto litigioso, formado en las coordenadas objetivas del derecho aplicable y con relación a unos hechos probados sobre los que debe emitir su juicio imparcial. Juicio imparcial no solo ya respecto a los intereses, y hasta pasiones de partes, sino también independiente de los propios intereses y libre de las propias pasiones y emociones del juez»⁵².

En el ámbito penal, la opinión que se acaba de citar es más importante, si cabe, incluso decisiva, en especial cuando los delitos son singularmente graves. Todo delito es de por sí reprobable, también en la Igle-

⁵¹ Cfr. J. GUASP, *Derecho procesal civil*, I, 4.ª ed., Civitas, Madrid 1998, 478-480.

⁵² C. DE DIEGO-LORA – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Lecciones de Derecho...*, cit., 395.

sia, aun cuando siempre se busque, como fin último, la salvación de las almas, incluida la del delincuente. Esta censurabilidad inherente a todo delito podría llegar a tal intensidad en algunos casos, como por ejemplo, los abusos de menores, que puede dañar la objetividad del juez y, en consecuencia, oscurecer la presunción de inocencia. Por reprochables que sean los actos, vulnerables las víctimas e intolerable el comportamiento de un concreto acusado, no puede rebajarse la presunción de inocencia, dejando paso a intuiciones subjetivas acerca de lo que realmente aconteció. La censura, indignación y escándalo por compartidos que estén en la Iglesia, con toda razón, en relación con algunos delitos, nunca pueden ser sin embargo justificantes para rebajar las garantías que el ordenamiento canónico ofrece en la administración de la justicia⁵³.

2.1.2. *El conocimiento experiencial del juez*

El elemento subjetivo de la certeza moral, todavía en conexión con la presunción de inocencia, encuentra también a veces su fundamentación, a nuestro parecer errónea, en la experiencia del juez, que sirve de sostén a la certeza personal porque una parte del conocimiento de los hechos, en esos casos de una dilatada experiencia judicial, es intuitiva. Desde luego la experiencia es un valor en el ejercicio de la función judicial, los casos tratados, el examen de los acusados y de los testigos, las pericias estudiadas, aportan la juez un *background* que puede ayudarle durante el procedimiento y, en su caso, en la recta valoración de la prueba, pero no puede elevarse la experiencia a tal grado que sustituya la certeza personal por la verdad de los hechos.

El conocimiento intuitivo o experiencial se da, por ejemplo, en el portero de fútbol⁵⁴ que sabe calcular la trayectoria del balón centrado a

⁵³ Cfr. Sentencia del Tribunal Supremo español 293/2020, 20 de junio, fundamento de derecho, n. 2. El tribunal supremo dicta Sentencia declarando haber lugar al recurso de casación núm. 3322/2018 interpuesto por los recurrentes contra la dictada el 6-IX-2018 por la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria y, en consecuencia, la casa y anula y dicta una segunda absolviéndoles de los delitos por los que fueron condenados. Tuvo como ponente al Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez. ECLI:ES:TS:2020:1720.

⁵⁴ El ejemplo pertenece a Frister y es citado por M. A. SANCINETTI, *Testimonio único...*, cit., 14.

su área para despejarlo o atraparlo antes de que el contrario pueda rematar. Ese conocimiento se aprende gracias a la experiencia adquirida en los numerosos partidos de fútbol que ha jugado en la posición de guardameta y posiblemente a los consejos del entrenador. De todas maneras, ese aprendizaje, se ha basado generalmente en la experiencia de acierto y error, más que en un estudio de las leyes físicas.

Este modo de llegar al conocimiento de la realidad de una forma intuitiva o experiencial no es trasladable a la formación de la certeza moral, por mucha que sea la experiencia del juez. El guardameta queda expuesto a los resultados, fácilmente contrastables, de su experiencia o conocimiento intuitivo. Si el guardameta que sale a atajar el balón se queda corto y deja el esférico a los pies del contrario, no podrá argumentar que, pese al gol en contra, según su convicción subjetiva logró atrapar el balón de fútbol⁵⁵. La certeza personal, siendo condición necesaria, para garantizar la realidad de los hechos no basta por sí sola, debe sustentarse en razones objetivas, no intuitivas simplemente pero de difícil sustentación frente a terceros.

2.1.3. *Negaciones del reo y petición de explicación de sus actos*

En la sentencia de la U.S. Supreme Court, de Coffin v. United States de 1985, traída como ejemplo por la doctrina canónica y secular⁵⁶, se relata lo siguiente: «Ammianus Marcellinus⁵⁷ relata una anécdota del emperador Juliano que ilustra la aplicación de este principio [el de presunción de inocencia] en el derecho romano. Numerius, el gobernador de Narbonensis, fue juzgado ante el emperador y, en contra de lo que se acostumbraba en los casos penales, el juicio fue público. Numerius se contentó con negar su culpabilidad, y no hubo pruebas suficientes contra él. Su adversario, Delphidius, “un hombre apasionado”, viendo que el fracaso de la acusación era inevitable, no pudo contenerse y exclamó: “Oh, ilustre César, si basta con negar, ¿qué será en adelante del culpa-

⁵⁵ Cfr. *ibíd.*

⁵⁶ Cfr. K. PENNINGTON, *Innocente fino a...*, cit., 36-38; A. S. SÁNCHEZ-GIL, *El principio ‘in dubio pro reo’...*, 1; M. A. SANCINETTI, *Testimonio único...*, cit., 3 y 19.

⁵⁷ Cfr. A. MARCELLINUS, *Rerum gestarum libri decem et octo*, Apud Seb. Gryphium, Lugd[uni] 1552, 180.

ble?»), a lo que Juliano respondió: “Si basta con acusar, ¿qué será del inocente?” *Rerum Gestarum*, L. XVIII, c. 1. La regla así encontrada en el derecho romano fue, junto con muchas otras máximas fundamentales y humanas de ese sistema, conservada para la humanidad por el derecho canónico. *Decretum Gratiani de Presumptionibus*, L. II, T. XXIII, c. 14, A.D. 1198 d.C.; *Corpus Juris Canonici Hispani et Indici*, R. P. Murillo Velarde, Tom. 1, L. II, n. 140»⁵⁸.

El proceso penal se inicia siempre, por mandato del Ordinario, con la iniciativa del promotor de justicia (la vía administrativa por la acusación del Ordinario o su Delegado), y el proceso se concibe en la ley y en la doctrina de tal manera que ningún juez puede incoarlo sin contar previamente con dicha iniciativa (c. 1501). La parte acusadora es la que dice saber lo que ocurrió, que a su entender justifica el ejercicio de acciones mediante la acusación procesal que formula; por el contrario, el reo, en sus defensas y excepciones, si se opone a la acusación, dirá al juez su otra versión de lo ocurrido, lo que dice saber. Y de igual modo que no hay juez, ni sentencia, sin demanda de parte dirigida frente a otra parte, tampoco puede darse la sentencia sin que una y otra parte tengan la oportunidad de probar ante el juez la veracidad de sus dichos, afirmaciones o negaciones. Es en la prueba en donde habrá el juez, objetivamente, de encontrar la verdad histórica, con aquella certeza moral que le permita sin temor pronunciar la sentencia. Hay sin embargo, *favores iuris* que entran en el juego del sistema probatorio, desplazando la carga de la prueba a la parte no favorecida por el *favor*⁵⁹.

Las meras negaciones, en principio carecen de valor probatorio alguno, por eso la tentación de Delphidius (si basta con negar, ¿qué será en adelante del culpable?) puede fácilmente insinuarse, en especial, en

⁵⁸ Cfr. US SUPREME COURT, *Coffin v. United States*, 156 U.S. 432 (1895): <https://bit.ly/3tuyBc4>. Última consulta, 1-IX-2021.

⁵⁹ Cfr. C. DE DIEGO-LORA, *Carga de la prueba, su inversión y presunciones al servicio de la verdad en el proceso canónico*, en J. APECECHEA – J. VESPERINAS (eds.), «*Veritas in Caritate*». *Miscelánea homenaje a Mons. Fernando Sebastián Aguilar*, Verbo Divino-Arzbispado de Pamplona y Tudela, Pamplona 2006, 439-467; M. GAS, «La carga de la prueba», en J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, I, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2012, 860-863 (en adelante, *DGDC*); P. A. BONNET, *Le prove nel giudizio ecclesiale*. Parte prima, *Periodica* 98 (2009) 235-273; Parte seconda, *Periodica* 98 (2009) 399-461; A. STANKIEWICZ, *Le caratteristiche del sistema probatorio canonico*, *Apollinaris* 67 (1994) 89-122.

los delitos más reprobables, amparada en razonamientos de que quedarían impunes muchos hechos delictivos, en los que no hay claramente prueba que le implique al acusado, porque bastaría la mera negación. El “problema” del juez no es determinar si los hechos delictivos habrían sido posibles e imputables al acusado según las aportaciones probatorias al proceso, sino valorar si son suficientes para destruir la presunción de inocencia. Al acusado no se le pide juramento de decir la verdad, no está obligado a autoinculparse⁶⁰, ni se le pueden pedir razones de unos actos que el juez intuye y anticipa en su veracidad, esperando que la falta de justificación del reo sea suficiente para contrarrestar la presunción de inocencia.

La presunción de inocencia de los fieles frente a las acusaciones de delitos, supone un alto coste para el sistema procesal, pues mantenerla en su integridad, es decir, sin que se dé cabida a modulaciones en su aplicación, sean cuales sean los delitos y los acusados, supone que a veces no serán condenados los verdaderos culpables porque no se ha alcanzado la certeza moral requerida, aunque la “intuición” del juez sobre la culpabilidad del reo siga sin disiparse. Aun así, la presunción de inocencia debe mantenerse a pesar de ese alto coste, porque si no «¿qué será del inocente?»⁶¹.

De todas maneras conviene recordar, en relación con las negaciones, que quien se defiende con simples negaciones de los hechos delictivos, adopta una solución cómoda pero en la que no debe confiar demasiado, pues la negación, no en raras ocasiones, puede ser desprovista de valor por la afirmación de un hecho positivo contrario que, si se acredita, podrá revelar de forma patente la certeza moral de lo que con

⁶⁰ «Póngase especial atención en que, según el c. 1728 § 2 CIC, el acusado no está obligado a confesar su delito, ni se le puede imponer un juramento *de veritate dicenda*»: CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, *Vademécum sobre algunas cuestiones procesales ante los casos de abuso sexual a menores cometidos por clérigos*, 16-VII-2020, n. 110: <https://bit.ly/3uNjg1W>. Última consulta, 1-IX-2021. En adelante VCDF. «Al investigado no se le puede imponer realizar un juramento (cfr. *ex analogía* cc. 1728 § 2 CIC y 1471 § 2 CCEO)»: n. 54 VCDF.

⁶¹ A los presentes en una convención de derecho penal internacional se dirigía Pío XII con estas palabras: «S’il est impossible d’établir la culpabilité avec une certitude morale, on s’en tiendra au principe: *in dubio standum est pro reo*»: Pío XII, *Allocutio ii qui interfuerunt VI^o conventui internationali de iure poenali*, 3-X-1953, AAS 45 (1953) 737.

la negación se pretendía destruir. Para obviar esa posibilidad ha tomado cuerpo el fenómeno llamado de la *coartada*, en relación con delitos premeditados, en los que su autor no solo preparará la comisión del delito de tal modo que le asegure el resultado de su crimen, sino que además lo planeará de tal modo que elimine todo temor de que se demuestre su autoría; se servirá para ese fin de un hecho positivo contrario, fácil de acreditar más tarde, que excluya, con cierta certeza, la posibilidad de haber cometido aquel hecho delictivo en las condiciones concretas en que aparece perpetrado.

2.2. *Las pruebas ex officio y la imparcialidad del juez*

Los procesos penales afectan al bien público eclesiástico y permiten una intervención directa del juez de cierta amplitud (inquisición) que no debería comprometer la imparcialidad del oficio judicial. Por eso en estos procesos es necesario alcanzar un equilibrio entre la imparcialidad del juez y la autorización que el legislador le concede para intervenir *ex officio* a tenor de los cc. 1452 y 1600.

Según el c. 1452, una vez introducida la causa criminal, el juez puede proceder de oficio (§ 1) para «suplir la negligencia de las partes en la presentación de pruebas o al oponer excepciones, siempre que lo considere necesario para evitar una sentencia gravemente injusta» (§ 2). Por su parte el c. 1600 § 1 autoriza al juez para que después de la conclusión de la causa pueda llamar a los mismos o a otros testigos, o mandar que se practiquen pruebas no pedidas con anterioridad: 1.º después de oír a las partes y con tal de que haya una razón grave y se evite todo peligro de fraude o de soborno; 2.º cuando es verosímil que, de no admitirse una nueva prueba, la sentencia habrá de ser injusta, por las razones expuestas en el c. 1645 § 2, 1.º-3.º.

Estas prescripciones son para el proceso judicial, en el procedimiento administrativo penal es la autoridad eclesiástica la que acusa y aporta todas las pruebas que incriminan al acusado. Por eso, a primera vista, el Ordinario propiamente no es imparcial en el procedimiento administrativo penal, es el acusador (c. 1720, 1.º) y el que dictará decreto penal si llega a la certeza moral de la comisión del delito y su imputabilidad (c. 1720, 3.º). Ahora bien, en la vía penal extrajudicial no se eliminan las «garantías procesales que se prevén en un proceso justo

(cfr. c. 221 CIC y 24 CCEO)» dice el n. 91 VCDF, pero no se garantiza que la decisión provenga de un juez absolutamente imparcial⁶².

«En el proceso canónico –prescindiendo del momento de su instauración, para el que vale, a tenor de los cc. 1501 y 1620, 4.º (cfr. c. 1303 § 1, 4.º CCEO), el principio *nemo iudex sine actore*–, al impulso de parte, que es *exclusivo* para las causas relativas al bien privado, se añade en las causas concernientes al bien público el impulso de oficio, que corresponde al juez, al cual –cualquiera que sea la naturaleza del litigio de que se trate– compete además un incisivo poder de suplencia de las partes para evitar que pueda darse una decisión gravemente lesiva de la justicia y de la verdad»⁶³.

Siendo el texto anterior innegable, si nos centramos solo en el proceso penal, pudiera surgir la duda de la necesidad de una actuación *ex officio* en la presentación de pruebas no pedidas con anterioridad, oponiendo excepciones, llamando a los mismos o a otros testigos cuando es verosímil que, de lo contrario, la sentencia podría ser injusta, porque en este tipo de procesos es necesaria desde el inicio la actuación el promotor de justicia «quien por oficio está obligado a velar por el bien público» (c. 1430). Ahora bien, el promotor de justicia no es un oficio judicial⁶⁴, defiende el bien público eclesial desde la posición de parte procesal⁶⁵, pero no tiene como misión su protección «pues tal función la cumple la jerarquía eclesiástica en el ejercicio de su poder jurisdiccional; tampoco tutela directamente el bien público ante los tribunales de justicia, pues ello, en primer lugar, corresponde al juez o tribunal en

⁶² «Da quanto sopra emerge, allora, il motivo fondamentale del perché la via giudiziale sia de preferire a quella amministrativa, tranne che ricorrono *iustae causae* ostative: solo la prima offre le opportune garanzie, assicurando che la causa venga decisa da un giudice assolutamente imparziale non a conoscenza dei fatti, dei quali viene edotto solo al momento della presentazione del libello accusatorio, sì che nessun convincimento o preconetto è presente in lui»: C. PAPALE, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro VII, Parte IV*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2012, 81. Decía Pío XII dirigiéndose a los especialistas en derecho penal internacional: «Aux garanties du droit se rattache comme un facteur essentiel la composition impartiale de la cour de justice»: Pío XII, *Allocutio ii qui* (1953)..., cit., 736.

⁶³ P. A. BONNET, *sub c. 1452*, ComExe, IV/1, 935.

⁶⁴ Cfr. D. LAZZARATO, *Il promotore della giustizia esercita funzioni giurisdizionali?*, Il Diritto Ecclesiastico 48 (1937) 366-368.

⁶⁵ Cfr. R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *La participación del promotor de justicia en los procesos contenciosos*, Fidelium Iura 7 (1997) 254-258.

cada proceso (c. 1452 § 1)»⁶⁶. Precisamente, debido a la tutela del bien público eclesiástico que le corresponde al juez, el legislador autoriza el impulso *ex officio* en los procesos penales.

La iniciativa *ex officio* no es absoluta, está limitada como hemos visto por las prescripciones de los cc. 1452 y 1600. Esas normas revelan que la inquisición del juez está sometida a estrictas condiciones y que, aunque su influencia puede dejarse sentir en todo el proceso, su más amplia actuación puede darse en el ámbito de las pruebas. Al respecto conviene ponderar estas dos cuestiones:

1.^a En el ámbito de la prueba viene a ser indiferente de quien provenga la iniciativa en la proposición, pues toda la prueba que se aporte al proceso es prueba que pertenece al proceso y nunca a los sujetos que la aportaron. Es el ya mencionado *principio de adquisición de prueba*. Todo lo que en las actas del proceso se contiene pertenece al proceso y queda sometido al juicio del juzgador. El juez adquiere la certeza moral necesaria para dictar su sentencia *ex actis et probatis*, basta que las pruebas sean pertinentes, legítimas y hayan sido admitidas por el juez (c. 1527)⁶⁷.

En el mundo secular, con diversas gradaciones dependiendo del ordenamiento jurídico concreto, se reconoce también que cierta iniciativa del juez penal en el momento procesal de la prueba no es incompatible con su imparcialidad. Así, por ejemplo, consta en el art. 708 de la ley de enjuiciamiento criminal española que autoriza a formular preguntas al procesado para esclarecer los hechos acontecidos, o en el art. 729, 2.º de la misma ley donde se reconoce que el juez puede practicar pruebas *ex officio*.

2.^a Una actitud acusatoria del juez significaría una quiebra en el deber de imparcialidad del tribunal en el proceso judicial. En efecto, como dice una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la finalidad de las actuaciones *ex officio* del juez penal deben ser en orden a encontrar la verdad material, compatible con el derecho a un proceso justo⁶⁸. La actuación *ex officio* se entiende en la medida que se quie-

⁶⁶ C. DE DIEGO-LORA – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Lecciones de Derecho...*, cit., 245.

⁶⁷ *Ibid.*, 350.

⁶⁸ Cfr. V. FAIRÉN GUILLÉN, *Sentencia del caso “Barbera, Messegue y Jabardo”*: *Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, *Revista de derecho procesal* 2 (1989) 295-352.

ran aclarar algunos aspectos que han quedado dudosos en la práctica de la prueba y que se consideren necesarios para alcanzar la verdad material de los hechos, pero dicha intervención no es compatible con la petición de pruebas que tengan un sesgo incriminatorio, suplantando la misión del promotor de justicia, o la realización de un examen del reo o de los testigos donde las preguntas revelen una anticipada toma de postura del juez acerca de la culpabilidad del acusado. Tampoco serían admisibles los supuestos relatados pero en el sentido de complicidad con el acusado. En esta temática no es tan importante, en orden a respetar la imparcialidad del juez, el dato cuantitativo de las propuestas *ex officio*, sino la calidad de estas, que deben evitar tanto el activismo del juez hacia algunas de las posturas de las partes como su pasividad cuando la justicia del proceso le requiere intervenir *ex officio* dentro de los límites del CIC.

2.3. *La valoración de la prueba*

El c. 1608 requiere del juez que alcance certeza moral acerca del objeto sobre el que ha de pronunciar su sentencia (§ 1). Certeza que debe obtener de lo alegado y probado en juicio (§ 2), para lo cual es imprescindible que valore todo el material que se ha aportado al proceso. Valoración que realizará según su conciencia quedando firme lo que está previsto por el legislador para algunos medios de prueba (§ 3).

En el CIC hallamos, en efecto, algunos preceptos enfocados a la valoración de las pruebas. Por ejemplo: sobre la confesión judicial (c. 1536), los documentos públicos eclesiásticos o no (c. 1541) o sobre los testigos (cc. 1572 y 1573). A pesar de estas normas, la doctrina es proclive a sostener que nuestro ordenamiento canónico ni sanciona un sistema de valoración legal de la prueba ni acoge el sistema de prueba tasada, sino que, al tiempo que se admite la valoración según conciencia del juez, el c. 1527 § 1 permite que en el sistema procesal canónico haya la más amplia libertad para los instrumentos de prueba, con la sola limitación de que sean pertinentes y lícitos. El legislador da el predominio a un sistema de apreciación realista de la prueba atento a las exigencias del caso concreto, pero con sus limitaciones.

En efecto, la jurisprudencia rotal ha venido sentando a lo largo del tiempo una doctrina orientadora, de la que los jueces eclesiásticos se sir-

ven para apoyar su decisión, en este campo de la valoración de las pruebas, acogiendo ciertas máximas surgidas de la observación y la experiencia generalizada: tales son, por ejemplo, «cuanta mayor verosimilitud presenta una afirmación, más fácilmente será creída»; «las pruebas que no sirven, si se toman por separado, unidas, prestan ayuda hasta en el juicio criminal»; «no se deduzca la prueba de la materialidad de las palabras, sino de las circunstancias todas de la causa, una vez comprobadas»; etc.⁶⁹

Son máximas, como se ha señalado, de sabiduría, en materia de valoración de las pruebas, contrastadas por la experiencia jurídica y que nos acercan a entrever el origen no supersticioso, sino, por el contrario, de verosimilitud racional en cuyo cultivo se ha engendrado tantas veces la prueba legal. Pero no tienen, sin embargo, el valor absoluto de prueba legal, al no estar acogidas en la ley positiva, sino el de acertado criterio orientador que coadyuva a la formación, en la conciencia del juez, de una conclusión generadora de certeza moral.

Además, contamos con la clara prescripción del c. 1608 § 3. El juez emitirá su juicio en respeto de las normas sobre la eficacia de ciertas pruebas. ¿Cómo resolver la posibilidad del conflicto legal, que pudiera originarse en el juez, entre su criterio forjado en conciencia, de valoración libre de la prueba, en oposición a la eficacia contraria que a una determinada prueba puede darle una ley canónica?

Esa pregunta se la planteó de Diego-Lora. El insigne procesalista se pronunciaba sirviéndose de apoyos doctrinales y jurisprudenciales, «a favor de la libertad de juicio del juez, al objeto de postular para él un mayor arbitrio prudencial, en el sentido de que la certeza moral de quien juzga en conciencia no se vea violentada por una imposición valorativa de la prueba hecha por la ley, como si la sentencia fuera obra del legislador y no del juez; como si este fuera solo un instrumento para la mecánica aplicación de la ley positiva y no el autor y responsable de la justicia que la sentencia, aunque sometida a la ley, requiere en cada caso concreto». Y añadía: «En consecuencia, estas reglas legales han de servir de orientación y de material de trabajo proporcionado por el legislador, por lo que el juez las deberá tener en cuenta al dictar su sentencia: bien para apoyarse totalmente en ellas, si la certeza moral que en

⁶⁹ Cfr. F. DELLA ROCCA, *Instituciones de derecho procesal canónico*, Desclée de Brouwer, Buenos Aires 1950, 216.

conciencia adquiere acerca de los hechos debatidos coincide con las fuentes de certeza que le proporciona la valoración legal de la prueba; bien para no atenerse a ellas, debiendo mostrar entonces, en la argumentación de la sentencia, las razones que le han llevado en el caso concreto a no seguir el criterio de valoración legal establecido»⁷⁰.

El juez se halla en un ámbito jurídico de carácter operativo en el que la responsabilidad de la decisión es suya exclusivamente. A él corresponde por entero el conocimiento e interpretación de la prueba en el caso concreto. Está, sin embargo, sometido a la observancia de la ley y debe tener en cuenta los criterios legales para dictar sentencia. Dichos criterios se aplican al caso concreto por mediación del juez, son por eso directivas instrumentales de origen legal que facilitan al juez la valoración de la prueba en orden a la certeza moral que es apreciación exclusiva del tribunal. Cuando los criterios interpretativos personales del juzgador contradicen a los generales, deberá razonar y explicar fundadamente la peculiaridad concreta de su dictado judicial. Es decir, expresará públicamente, ante las partes y los posibles tribunales a los que se pueda recurrir, los argumentos legítimos que apoyan la solución que proporciona la sentencia, y todo aquello que justifique por qué no ha seguido el criterio de valoración legalmente establecido. Así pondrá en evidencia que su decisión no procede del puro arbitrio o de su imperio solamente, sino de la razón jurídica que, de acuerdo con el ordenamiento canónico, ilustró debidamente la conciencia del juez. La certeza moral adquirida y que ha sido plasmada en la sentencia se demuestra, de este modo, que fue alcanzada por vías de justicia y de prudencia, conforme la misma ley procesal lo permite.

Para que una sentencia penal tenga el fundamento legal que le exige el derecho de la Iglesia no es relevante el estado intelectual del juez⁷¹,

⁷⁰ C. DE DIEGO-LORA, *sub c. 1608*, ComExe, IV/2, 1543-1544. Cfr. IDEM, *La apreciación de las pruebas de documentos y confesión judicial en el proceso de nulidad de matrimonio*, Ius Canonicum 7 (1967) 529-537.

⁷¹ «Imagínese que le dicen a un matemático que sabe que tiene un resultado importante cuando lo cree sin la menor duda. Lo que establece un teorema matemático como teorema es la solidez de su demostración, no la confianza de su descubridor»: L. LAUDAN, *Is Reasonable Doubt Reasonable?*, Legal Theory, Volume 9, Issue 4, December 2003, 295-331. Published online by Cambridge University Press, 14 April 2004. DOI: <https://doi.org/10.1017/S1352325203000132>. Última consulta, 1-IX-2021. La traducción es nuestra.

sino cómo queda plasmado y justificado en la sentencia su itinerario intelectual para llegar a la decisión adoptada (qué razones le han llevado a aceptar unas pruebas y otras no, cómo ha resuelto las posibles dudas que se plantean, la racionalidad de su fundamentación jurídica).

2.4. *Informaciones privadas, secreto y conocimiento privado del juez*

2.4.1. *Interdicción de las informaciones privadas al juez*

«Está terminantemente prohibido que las partes, los abogados u otras personas, transmitan al juez informaciones que queden fuera de las actas de la causa», reza el c. 1604 § 1⁷². La interdicción de cualquier información privada al juez que no quede recogida en las actas de la causa, siguiendo el procedimiento establecido para la adquisición de las fuentes de información afecta en el proceso penal a cualquier toma de decisión procesal⁷³ y a la formación de la certeza moral del mérito de la causa porque lo sabido privadamente está al margen de lo alegado y probado (c. 1608 § 2), como reza el aforismo *quod non est in actis non est in mundo*. Como argumentó la doctrina anterior al CIC⁷⁴, en la actualidad se sigue justificando esta prohibición para asegurar que el proceso transcurre según los principios de publicidad y contradictorio, íntimamente unidos al derecho de defensa. Además la prohibición tutela la incuestionable imparcialidad del juez en su función de *ius dicere*, pues las informaciones privadas pueden ser motivo de la prevaricación del juez por el peligro de captación y soborno que conllevan (cfr. cc. 1456-1457). «La imparcialidad judicial es una garantía tan esencial de la función jurisdiccional que condiciona su existencia misma: “Sin juez imparcial no hay, propiamente, proceso jurisdiccional”»⁷⁵.

Del lugar sistemático del c. 1604 § 1 y su unión con el § 2 acerca del posible debate oral que puede ordenar el juez para aclarar algunas cuestiones, se deduce que las informaciones que el juez adquiere del de-

⁷² Cfr. R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *sub c. 1604*, ComExe, IV/2, 1511-1513.

⁷³ Cfr. M. J. ARROBA, *Diritto processuale canonico*, 2.^a ed., EDIURCLA, Roma 1994, 420.

⁷⁴ Cfr. F. X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, VI, apud aedes Universitatis Gregoriana, Romae 1927, 530.

⁷⁵ F. CORDÓN MORENO, *Introducción al Derecho Procesal*, Eunsa, Pamplona 2020, 54.

bate oral sustitutivo de la discusión escrita (c. 1602 § 1) o complementaria a esta (c. 1604 § 2) no son informaciones privadas, se producen en sesión del tribunal y con mandato del juez el notario puede levantar acta de los asuntos discutidos (c. 1605). De modo que «quede especialmente garantizado –por escrito, y de modo fidedigno– lo que se dijo y concluyó por cada una de las partes o sus abogados»⁷⁶.

La información adquirida por el proceso legalmente, no solo puede ser tenida en consideración, a diferencia de las informaciones privadas, sino que, además, debe darse a conocer al acusado. Escribe Llobell, que «no cabe duda de que las manifestaciones esenciales del derecho de defensa pertenecen al derecho natural (...). Por lo tanto, el derecho a conocer la identidad del denunciante, el objeto preciso de la denuncia y las pruebas pertinentes, y a contradecirlas, no puede faltar en ningún juicio justo (...). No solo porque así lo exige el derecho de defensa, sino también porque (...) son herramientas tan valiosas como necesarias para garantizar que el responsable de la toma de decisiones compruebe la verdad»⁷⁷. La conciencia de que el reo debe conocer el objeto de su acusación y los demás extremos de la causa se puso de relieve por varios consultores en la preparación de los principios directivos para la reforma del CIC⁷⁸, aunque posteriormente la comisión para la reforma del CIC pío-benedictino matizó que el conocimiento del nombre del acusador puede resultar contraproducente⁷⁹.

2.4.2. *Pruebas secretas*

El c. 1598 § 1 autoriza al juez penal a decretar que algún acto no sea manifestado a nadie, pero se refiere a un acto que está en las actas de la causa, no a una información privada, y la decisión de guardar secreto se tomará garantizando siempre el derecho de defensa⁸⁰. En el ámbito matrimonial mucho se ha debatido sobre esa norma, y las solu-

⁷⁶ C. DE DIEGO-LORA, *sub c. 1605*, en INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA (ed.), *Código de Derecho Canónico*, edición bilingüe y anotada, 10.^a ed., Eunsa, Pamplona 2021. En adelante será citado como CICPamplona.

⁷⁷ J. LLOBELL, *Il giusto processo penale...*, cit., 310. La traducción es nuestra.

⁷⁸ Cfr. *ibid.*, 310-311.

⁷⁹ Cfr. *Communications* 12 (1980) 194.

⁸⁰ Cfr. JUAN PABLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 29-I-2005, AAS 97 (2005) 164-166.

ciones adoptadas por la instr. DC, que intentaron salir al paso de las críticas que recibió el c. 1598 § 1 no han satisfecho a todos⁸¹. En el proceso penal se debería extremar el ejercicio de la atribución concedida por el c. 1598 § 1 al juez. La norma requiere, para el uso de esa excepción, que se “eviten peligros gravísimos” y, añade la doctrina, que la singularidad «non deve diventare la regola»⁸².

En los ordenamientos seculares, en relación con el mantenimiento de alguna prueba en secreto, se regula la posibilidad del ocultamiento y anonimato⁸³ de testigos y peritos en las causas criminales cuando hay razones justificativas. En efecto, la Directiva 2012/29/UE, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, regula en su art. 23.3, letra a) las medidas que se pueden adoptar para el caso de víctimas protegidas, entre las que se halla la de evitar el contacto visual con el acusado, acudiendo al uso de las nuevas tecnologías. Se discute, sin embargo, si el total anonimato del

⁸¹ Cfr. R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *sub c. 1598*, ComExe IV/2, 1481-1487; C. GULLO, *La pubblicazione degli atti e la discussione della causa*, en P. A. BONNET – C. GULLO (eds.), *Il processo matrimoniale canonico*, 2.^a ed., Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1994, 677-693; S. GHERRO, *Sul processo matrimoniale canonico: «pubblicazione degli atti» e dibattimento*, *Il Diritto Ecclesiastico* 105 (1994), II, 486-500; J. LLOBELL, *La pubblicazione degli atti, la «conclusio in causa» e la discussione della causa (istruzione «dignitas connubii», titolo IX, artt. 229-245). Ancora sul diritto di difesa delle parti in causa*, en P. A. BONNET – C. GULLO (a cura di), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii»*. Parte terza: la parte dinamica del processo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008, 509-558; C. PEÑA GARCÍA, *Defensores del vínculo y patronos de las partes en las causas de nulidad matrimonial: consideraciones sobre el principio de igualdad de partes públicas y privadas en el proceso*, *Ius Ecclesiae* 21 (2009) 353-355; E. DE LEÓN, *Publicación de las actas, privacidad de los hechos y prueba secreta (c. 1598 § 1 CIC'83 / art. 230 DC)*, en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CANONISTAS (eds.), *Procesos matrimoniales canónicos*, Dykinson, Madrid 2014, 157-169.

⁸² C. PAPALE, *Il processo penale...*, cit., 135. Juan Pablo II, «con respecto a la mencionada posible excepción, [expresó en un discurso a la Rota que] es justo observar que sería un torcimiento de la norma, además de un grave error de interpretación, si se hiciese de la excepción la norma general. Es necesario, por tanto, atenerse fielmente a los límites indicados en el canon»: JUAN PABLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26-I-1989, AAS 81 (1989) 924.

⁸³ Se distinguen en derecho español los testigos ocultos de los anónimos. Oculto es un testigo que no es visto por el acusado; de los anónimos el tribunal o el acusado o ambos desconocen su verdadera identidad. Cfr. S. M.^a ROSALES PEDRERO, *La protección de testigos en el proceso penal*, *Revista Foro FICP (Tribuna y Boletín de la FICP)* 2017-2, 527-528: <https://bit.ly/3k0vntt>. Última consulta, 1-IX-2021.

testigo es compatible con el art. 6 CEDH⁸⁴ que regula el derecho a un proceso equitativo, pues mientras el tribunal constitucional español⁸⁵ considera que el total anonimato de un testigo y la imposibilidad de contradicción son contrarios a la tutela efectiva, esta conclusión merece ser objeto de alguna matización, pues no siempre el testimonio anónimo carece de eficacia probatoria y resulta contrario al derecho a un proceso equitativo, a la luz de la propia doctrina del TEDH⁸⁶, de la que se deduce que no es totalmente contrario a ese derecho si la medida es justificada, no es contraria al derecho de defensa en consideración ponderada por el tribunal, y en el caso de que el anonimato se mantenga, para que no resulte un límite al derecho de contradicción [cfr. art. 6.3.d) CEDH], la defensa debe tener oportunidad de interrogar a los testigos y esta prueba no constituirá la decisiva para fundamentar la condena⁸⁷ (alcanzar la certeza moral).

La doctrina canónica ha expresado que solo “validi motivi” pueden justificar que alguna prueba sea guardada en secreto por el tribunal penal. «De hecho, cuando el acusado no conoce al acusador y no se puede hacer una confrontación, se produce una mortificación efectiva del derecho de defensa y, por tanto, también un riesgo para la consecución de la verdad, riesgo que, si hay razones válidas, debe asumirse, siempre que se utilicen todos los medios adecuados para reducir el riesgo al mínimo»⁸⁸.

Pueden trasladarse aquí, salvando la normativa canónica que veremos seguidamente, los criterios que se han recogido de la doctrina secular acerca de la necesaria ponderación de cada caso por parte del tribunal antes de decretar esa medida, que la prueba no represente la fuente principal en la que se apoya el tribunal para imponer la pena y la posibilidad

⁸⁴ *Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales*, BOE, n. 108, de 6-V-1999: [https://www.boe.es/eli/es/ai/1999/04/05/\(1\)/con](https://www.boe.es/eli/es/ai/1999/04/05/(1)/con). Última consulta, 1-IX-2021.

⁸⁵ En el Reino de España se regula la protección de testigos y peritos en causas criminales por la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, BOE núm. 307, de 24-XII-1994: <https://bit.ly/3mf1N63>. Última consulta, 1-IX-2021.

⁸⁶ Cfr. S. M.^a ROSALES PEDRERO, *La protección de testigos...*, cit., 529.

⁸⁷ Cfr. *ibíd.*

⁸⁸ V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro VI*, Urbaniana University Press, Roma 2000, 245. Cfr. J. LLOBELL, *Il giusto processo penale...*, cit., 311.

de usar los medios conocidos para que, salvando el anonimato del testigo cuando sea necesario, la defensa pueda interrogarlo, aunque el testigo en los supuestos del c. 1548 § 2 está exento de la obligación de responder.

En nuestro ordenamiento canónico el c. 1559 autoriza al juez a que valore, en el examen de los testigos, si debe procederse en forma secreta, es decir, sin asistencia ni de las partes ni de sus abogados, «por las circunstancias del asunto y de las personas». La razón de esta prescripción, se dijo expresamente, era «establecer algo semejante a la práctica de los tribunales laicos y poder resolver las dificultades en la misma instrucción»⁸⁹. El art. 159 DC reformula esa norma para los procesos de nulidad matrimonial, donde el defensor del vínculo no puede ser excluido del examen de los testigos, aunque el juez decida proceder en forma secreta.

Más expresamente, el art. 24 § 1 SST⁹⁰ establece que «en las causas por los delitos de los que se trata en el art. 4 § 1 [las relacionadas con el sacramento de la penitencia], el tribunal no puede dar a conocer el nombre del denunciante ni al acusado ni a su patrono si el denunciante no ha dado expresamente su consentimiento⁹¹» (cfr. n. 102 VCDF). El «tribunal debe evaluar con particular atención la credibilidad del denunciante⁹²» (§ 2), con la advertencia de que «debe evitarse absoluta-

⁸⁹ Communicationes 2 (1970) 186. Cfr. F. GIL DE LAS HERAS, *sub c. 1559*, ComExe, IV/2, 1355.

⁹⁰ Cfr. JUAN PABLO II, *Litterae apostolicae motu proprio datae Sacramentorum sanctitatis tutela* quibus normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur, 30-IV-2001, AAS 93 (2001) 737-739, CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDELI, *Normae de gravioribus delictis*, 21-V-2010, AAS 102 (2010) 419-430. Las *Normae* se citarán por su artículo y las siglas SST. Han sido objeto de reformas por dos *rescripta ex audientia* del papa Francisco de fecha 3-XII-2019 (que reforma los artículos 6, 13 y 14 de las *Normae sui delicti reservati*) y 6-XII-2019 (que contiene la instrucción *Sobre la confidencialidad de las causas*), ambos rescriptos fueron publicados en L'Osservatore Romano, 18-XII-2019, 5.

⁹¹ «Cavetur solertissime, ne denunciantium nomina reo manifestentur et ne sacramentale sigillum quoquomodo violetur»: SCSO, Instr. *Quae Supremus Pontifex*, 20-II-1867, n. 11, ASS (1867-1868) 499-505.

⁹² En 1627 el santo Oficio daba instrucciones para que se sopesase la cualidad del denunciante y del denunciado, cfr. SCSO, Instr. *Accioche più fundatamente*, 17-VII-1627, en J. PIGNATELLI, *Consultationes canonicae in quibus praecipuae controversiae*, t. I, Sumpt. Gabrielis & Samuelis de Tournes, Coloniae Allobrogum 1718, 127-128. Y en otra instrucción posterior se puede leer: «Ut plurimum nonnisi a tertia denunciatione procedit solet»: SCSO, Instr. *Quae Supremus Pontifex...*, cit.

mente cualquier peligro de violación del sigilo sacramental⁹³» (§ 3). La justificación de esta reserva se halla, por tanto, en obviar el peligro de violación del sigilo por parte del acusado y, puede añadirse además, impedir también (si en la valoración del tribunal se pudieran dar) las posibles amenazas del acusado contra su denunciante. Si en la apreciación del tribunal no se diera ninguno de esos peligros, podría pensarse en comunicar el nombre al acusado o a su abogado si el denunciante ha dado expresamente su consentimiento, en caso contrario, el tribunal tiene prohibido dar su nombre, que debe permanecer en el anonimato. La inviolabilidad del sigilo sacramental (cfr. c. 983) es tan absoluta que todo lo que el sacerdote conoce por confesión, o lo que haya oído alguien con motivo de ese sacramento, «no puede ser aceptado ni siquiera como indicio de la verdad» (c. 1550 § 2, 2.º) por los tribunales de la Iglesia.

2.4.3. *Influencia de la ciencia privada del juez en la sentencia penal*

El tercer tema de este apartado es clásico en la doctrina. Si alcanzada la certeza moral el juez debe condenar al reo incluso cuando por ciencia privada conoce de su inocencia.

«*Quaestio inter theologos agitata*», escribió Conte a Coronata⁹⁴. La duda que se intenta resolver se presenta en dos sentidos: si por lo alegado y probado el reo aparece como culpable pero por ciencia privada el juez conoce que es inocente, ¿debe condenarlo?; y, por el contrario, cuando se ha probado que es inocente pero el juez, por conocimiento extraprocesal sabe de su culpabilidad, ¿debe absolverlo? En la solución de esos casos no era indiferente la gravedad de la pena que se impondría al condenado.

⁹³ «Ma procedendo V.S. colla solita sua attenzione, ammonirà li sponte comparenti, o rei costituiti a non deporre cosa alcuna, che concerna il sigillo delle sacramentali confessioni de' penitenti, ma riferire solamente ciò, che riguarda il detto, o fatto di essi sollicitanti»: SCSO, Instr. *La santità*, 23-III-1726, en U. GIRALDI, *Expositio Iuris Pontifici iuxta recentiore Ecclesiae disciplinam in duas partes distributa*, t. II: Pars prima tomus secundus. Apud Dominicum Ercole, Romae 1830, 642-643. Cfr. art. 52 de SCSO, Instr. *Crimen sollicitationis*, de modo procedendi in causis sollicitationis, Typis Polygottis Vaticanis 1962, 17.

⁹⁴ Cfr. M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, III: *de processibus*, 3.ª ed., Dominus Editorialis Marietti, Taurini-Romae 1948, 307-308, n. 1397.

En autores anteriores al CIC 83 se dieron soluciones diversas en relación con las causas criminales⁹⁵: unos sostuvieron que en cualquier caso se decide de acuerdo a lo alegado y probado, aunque por ciencia privada se conozca lo contrario⁹⁶; otros siguen a Lugo que rechaza la condena del reo cuando se conoce por otras fuentes no procesales que es inocente, especialmente si la condena grave⁹⁷; y una tercera opinión sostiene que si es inocente se le debe absolver en todo caso⁹⁸.

Más modernamente, aunque se sigue opinando que el juez no debe condenar al acusado si tiene conocimiento privado de su inocencia, se plantea la posibilidad de que se abstenga para que la causa sea juzgada por otro juez, solución que es posible para los dos supuestos dudosos en los que la ciencia privada del juez reclama soluciones diversas a la adquirida por las alegaciones y pruebas⁹⁹. Esta opinión también estaba presente en autores anteriores al CIC 83¹⁰⁰. La abstención del juez posibilita que pueda aportar su conocimiento privado como testigo, contribución que no puede ofrecer por ser considerado incapaz (c. 1550 § 2, 1.º) si no se abstiene previamente. La abstención en esos supuestos

⁹⁵ Cfr. M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici...*, cit., 307-308; F. X. WRENZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, VI..., cit., 538-539; J. NOVAL, *Commentarium Codicis Iuris Canonici*, L. IV: *de processibus, pars prima: de iudiciis*, Petri Marietti Editoris, Augustae Taurinorum-Romae 1920, 410-411; F. DELLA ROCCA, *Saggi di diritto processuale canonico*, CEDAM, Padova 1961, 275-282; M. CABREROS, *sub c. 1869*, en L. MIGUÉLEZ – S. ALONSO – M. CABREROS, *Código de Derecho Canónico y legislación complementaria*, BAC, Madrid 1969.

⁹⁶ Cfr. TOMÁS DE AQUINO, *Summa Theologica*, II-II, q. 64, a. 6, ad 3 y q. 67, a. 2; F. ROBERTI, *De processibus*, II, apud aedes Facultatis Iuridicae ad S. Apollinaris, Romae 1926, n. 448, nt 3.

⁹⁷ Cfr. I. DE LUGO, *De iustitia et iure*, disput. 37, n. 43 ss, citado por S. ALONSO – M. CABREROS, *Comentarios al Código de Derecho Canónico*, III, BAC, Madrid 1964, 613.

⁹⁸ Cfr. F. M. CAPELLO, *Summa Iuris canonici in usum scholarum concinnata*, III: *De processibus, delictis et poenis*, 4.ª ed., apud aedes Universitatis Gregoriana, Romae 1955, 294.

⁹⁹ Cfr. C. PAPALE, *Il processo penale...*, cit., 149-150, nt 162. Con citas de: M. MOSCONI, *L'indagine previa e l'applicazione della pena in via amministrativa*; GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (eds.), *Processi e procedure speciali*, XXV incontro di studio Villa S. Giuseppe, Torino, Glossa, Milano 1999, 219-220; P. ERDÖ, *La certezza morale nella pronuncia del giudice. Problemi attuali*, Periodica 87 (1988) 81-104. Sigue la doctrina del Aquinate, F. RAMOS, *I tribunali ecclesiastici, costituzione, organizzazione, norme processuali, cause matrimoniali*, 2.ª ed., Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino, Millenium Romae 2000, 515-516.

¹⁰⁰ Cfr. S. ALONSO – M. CABREROS, *Comentarios al Código...*, cit., 612-613.

es posible aunque no esté incluida expresamente en el c. 1448 § 1, porque el elenco que ofrece ese canon, según la doctrina, no es cerrado. En efecto, el art. 67 DC, después de transcribir los supuestos del c. 1448 § 1, añadió que el juez no debe aceptar conocer cualquier causa «en la que pueda recaer sobre él cualquier otra sospecha fundada de acepción de personas».

¿Pero a qué nos referimos exactamente con la expresión conocimiento privado del juez? El legislador requiere, para el nombramiento de juez, unos conocimientos previos, adquiridos y contrastados, de suficiente calidad (c. 1421 § 3) para asegurar que desempeñará su función de juzgar con una formación jurídica adecuada y profesional. También se valora la experiencia previa para actuar como miembro del tribunal¹⁰¹. Además pertenecen a este rango de conocimiento privado las máximas de experiencia¹⁰², los hechos notorios¹⁰³, etc., que pueden ser relevantes para su misión. También el juez adquiere conocimiento, que posiblemente no consta en actas, de las observaciones e impresiones que va acumulando durante el proceso cuando se practica la prueba, conjeturas que pueden ser fuente de presunciones *hominis* (c. 1584), etc. El uso que el juez haga de estos elementos cognitivos quedará reflejado en la motivación de la sentencia, que revelará la génesis de esos saberes, su legalidad y la aplicación al caso concreto. Todo esto no debe designarse propiamente como conocimiento privado del juez.

El principio *iudex iudicet secundum allegata et probata partium* no excluye la información que procede de las fuentes arriba descritas, sino la utilización por parte del juez de sus percepciones extrajudiciales sobre hechos controvertidos para excluir la prueba. Y la razón de

¹⁰¹ «Conviene advertir que estas reglas serán insuficientes para el fin que se proponen si los jueces diocesanos no poseen un conocimiento profundo de los sagrados cánones ni cuentan con una buena experiencia forense»: DC... cit., Preámbulo, 17-18. El art. 42 § 2 DC recomendaba «encarecidamente no nombrar Vicario judicial o Vicario judicial adjunto a quien carezca de experiencia forense».

¹⁰² Cfr. F. STEIN, *El conocimiento privado...*, passim.

¹⁰³ En la redacción del c. 1526 § 2, en relación con los hechos notorios, prevaleció la opinión de un consultor para suprimir la expresa referencia a la no necesidad de probar los hechos notorios ya que estos, por definición, son de muy fácil prueba. Cfr. *Communicaciones* 11 (1979) 98; J. P. SCHOUPPE, *sub c. 1526*, *ComExe*, IV/2, 1277. Aunque no se incluyen en el canon, pensamos que en muchos casos sigue siendo de aplicación el viejo principio de derecho, *notoria non egent probatione*.

esa prohibición en el proceso penal no es primordialmente el principio de contradicción¹⁰⁴ como la doctrina canónica aduce, porque, en las causas criminales, la búsqueda de la verdad está bajo el dominio del principio de oficialidad, es una búsqueda, en última instancia, *ex officio*¹⁰⁵, dentro de los límites que hemos explicado *supra*. La verdadera causa de la prohibición «radica primeramente en la imposibilidad psicológica de enjuiciar imparcialmente la propia testificación, en la incapacidad del hombre para salir de sí mismo y, aunque solo sea con objetividad aproximada, juzgar el valor o la carencia de valor de la propia percepción»¹⁰⁶. No es, por tanto, principalmente la falta de contradictorio (que también podría darse¹⁰⁷), sino que el juez, si tiene un conocimiento fuera del ámbito procesal de los hechos sobre los que debe juzgar, no sería juez, sino testigo. «El juez, al principio, se encuentra ante una hipótesis; no sabe cómo ocurrieron las cosas; si lo supiese, si hubiese estado presente en los hechos sobre los que debe juzgar, y si decide, precisamente, convierte la hipótesis en tesis, adquiriendo la *certeza* de que ha ocurrido o no un hecho, es decir, *certi-*

¹⁰⁴ Cfr. J. M.^a SERRANO RUIZ, *Una discutible cuestión procesal: los conocimientos personales del juez en la instrucción del juicio*, en F. R. AZNAR GIL (ed.), *Estudios de derecho matrimonial y procesal en homenaje al Prof. Dr. D. Juan Luis Acebal Luján*, Publicaciones Universidad de Salamanca, Salamanca 1999, 240.

¹⁰⁵ «Procurator actoris actionem non suam movet, sed publicam, ordinatam ad tutandum bonum publicum, quare in hisce iudiciis iudex supplere debet quae accusatore deducta non sunt, efficiens ut probationes iudiciales compleantur et sententia prodeat respondens actis et probatis»: V. PALESTRO, *Le sentenze penali...*, cit., 338-339, es una cita de un decreto *coram* Lega, de 11-V-1909. Añade Lega que en las causas criminales no está prescrito que la sentencia sea conforme al libelo (como en las causas civiles), por la razón apuntada en la cita, es decir, la intervención *ex officio*.

¹⁰⁶ F. STEIN, *El conocimiento privado...*, cit., 4.

¹⁰⁷ El principio contradictorio forma parte de la estructura fundamental del proceso en la Iglesia, cfr. C. ARIANO, *Il principio del contraddittorio. Lineamenti comparativi tra processo italiano e canonico*, *Prudentia Iuris* 84 (2017) 165-189; F. DOTTI, *Diritti della difesa e contraddittorio: garanzia di un giusto processo? Spunti per una riflessione comparata del processo canonico e statale*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2005; S. GHERRO (ed.), *Il principio del contraddittorio tra l'ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali. Roma L.U.M.S.A., 13 aprile 2002*, CEDAM, Padova 2003; S. VILLEGIANTE, *Il principio del contraddittorio nella fase di costituzione del processo ordinario per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, en Z. GROCHOLEWSKI – V. CÁRCCEL ORTI (eds.), *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1984, 349-361.

ficando ese hecho. Estar cierto de un hecho quiere decir conocerlo como si se lo hubiese visto»¹⁰⁸.

Piénsese en la diferencia procesalmente esencial que hay entre el conocimiento de un objeto, lugar, etc. por parte de un testigo y el acceso o reconocimiento judicial (cc. 1582-1583). En el primer caso, el testigo ofrece al juez su saber sobre lo que presencié, por el contrario, cuando el juez accede al mismo lugar manda levantar acta de lo que aprecia en ese momento, información que puede servirle como indicio de acontecimientos pasados, pero también puede ordenar simular qué aconteció para valorar su veracidad. El juez solo se enfrenta directamente con los hechos en la inspección ocular, en los demás casos se le presentan como afirmaciones del promotor de justicia, del acusado o de testigos¹⁰⁹.

El c. 1447 nos revela la profunda incompatibilidad existente entre ser juez y ser testigo, o poder testimoniar como tal, lo que viene a resultar lo mismo desde la protección con que debe garantizarse a las partes la imparcialidad y la independencia judiciales. Por eso, los jueces no llegan realmente a percibir de modo directo el objeto de la prueba, sino que siempre sus percepciones de los hechos deberán tener lugar a través de diversas mediaciones que llamamos medios de prueba. Por tanto, un juez que conoce privadamente de la inocencia o culpabilidad del acusado debería abstenerse de juzgar la causa y aportar su conocimiento por los cauces procesales previstos en el derecho.

3. PRONUNCIAMIENTOS DE LA SENTENCIA

La sentencia penal puede tener varios pronunciamientos. Para los comentaristas del CIC 17 los veredictos podían ser: absolutorio del delito; absolutorio de la instancia (c. 1869 § 4 CIC 17); condenatorio en todo o en parte y, por último, declaratorio del delito y pena *latae sententiae* en que incurrió el reo¹¹⁰.

¹⁰⁸ F. CARNELUTTI, *Cómo se hace un proceso*, Edeval, Valparaíso 1979, 67; IDEM, *La prueba civil*, 2.ª ed., Depatma, Buenos Aires 1982, 18-22.

¹⁰⁹ Cfr. F. STEIN, *El conocimiento privado...*, cit., 13.

¹¹⁰ Cfr. M. LEGA – V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, III, A.L.C.I., Romae 1950, 338-340; T. MUNIZ, *Procedimientos eclesiásticos*, III, 2.ª ed., Imp. y Lib. de Sobrino e Izquierdo, Sevilla 1926, 542-543. Esta clasificación era recordada en una

El c. 1873 § 1, 1.º CIC 17 prescribía que la sentencia debe dirimir la contienda, es decir: «absolver o condenar al reo en lo referente a las peticiones o acusaciones hechas contra él, dando la conveniente respuesta a cada una de las dudas o artículos de controversia». La absolución y la condena pueden coexistir en la misma sentencia, cuando son múltiples las acusaciones, pues en unas el veredicto puede ser de condena y en otras absolutorio.

Sobre la sentencia absolutoria de la instancia se decía que a ella «equivale la declaración que en las causas dudosas el juez haga de no constar suficientemente el delito acusado»¹¹¹. La absolución no recaía sobre el crimen, sino sobre la acusación, porque esta había prescrito o no constaba suficientemente la comisión del delito. En el primer caso (por prescripción) se entendía que la absolución de la instancia era absoluta y, en el segundo supuesto, relativa¹¹². Estas distinciones tenían después su importancia ante el efecto de cosa juzgada de la sentencia¹¹³, pues se sostenía que la absolución de la instancia no pasaba a cosa juzgada porque no se pronunciaba sobre la existencia del delito sino solo sobre la instancia. Distinción que la jurisprudencia de la Rota rechaza en la actualidad¹¹⁴.

En el CIC vigente no encontramos propiamente una clasificación de pronunciamientos en la sentencia penal. Por un lado, la norma paralela al c. 1873 § 1, 1.º CIC17 simplifica el texto derogado, indicando que la sentencia debe dirimir la controversia dando respuesta a cada duda, sin hacer indicación del tipo de pronunciamiento (cfr. c. 1611, 1.º), veredictos de absolución o culpabilidad que se pronunciarán atendiendo a las exigencias del c. 1608 sobre la certeza moral, de la que ya hemos hablado en los epígrafes anteriores. El c. 1348 (que se mantiene igual en el nuevo libro VI del CIC) acerca de la ejecución de la sentencia emplea la expresión “absolución de la acusación” pero no es equiparable solo a

coram Stankiewicz, Decr., 11-XI-1993, Posnaniense – Dimissione dello stato clericale – Pregiudiziale: nuova proposizione della causa, *Ius Ecclesiae* 7 (1995) 674-675. Para su comentario, cfr. H. FRANCESCHI, *L'impugnazione del giudicato nel processo penale: «restitutio in integrum» o «nova causae propositio»*, *Ius Ecclesiae* 7 (1995) 676-689.

¹¹¹ T. MUNIZ, *Procedimientos eclesiásticos...*, cit., 542.

¹¹² Cfr. M. LEGA – V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia...*, cit., 339.

¹¹³ Cfr. *ibid.*, 364-365.

¹¹⁴ Cfr. *coram* Stankiewicz, Decr., 11-XI-1993..., cit., 674.

la “absolución de la instancia” empleada por lo comentadores del CIC 17, pues incluye, según los autores, varios supuestos de absolución¹¹⁵. Además está el c. 1726 –que examinaremos más adelante– sobre la sentencia absolutoria cuando es evidente que el delito no se ha cometido.

El CIC tiene una norma específica para el proceso administrativo penal, donde se determina que, para imponer la pena, se requiere la certeza de que consta el delito y que no haya prescrito la acción penal: «si consta con certeza el delito –reza el c. 1720, 3.º– y no se ha extinguido la acción criminal, dictará decreto de acuerdo con los cc. 1342-1350, exponiendo, al menos brevemente, las razones de derecho y de hecho». Norma que, según la doctrina¹¹⁶, vale también para la sentencia judicial.

La praxis de la CDF distingue tres tipos de decisiones¹¹⁷. Estaban presentes en la Instr. *Crimen sollicitationis* de 1922 y en la reimpresión de 1962¹¹⁸, en concreto en el n. 56: «Tandem, congruo temporis spatio interposito (c. 1870), iudex, pro conscientia ex actis et probatis sibi eformata (c. 1869), definitivam sive condemnatoriam, si certus de crimine; sive absolutoriam, si certus de innocentia; sive dimissoriam, si ex defectu probatioum invincibiliter dubius, sententiam pronuntiabit»¹¹⁹.

El n. 84 del VCDF no se aparta de esa praxis y expone los tipos que puede adoptar la sentencia penal o el decreto extrajudicial penal. La decisión puede ser condenatoria (“constat”), absolutoria (“constat de non”) y dimisoria (“non constat”). «La decisión –por sentencia o por decreto– deberá indicar a cuál de estas tres tipologías hace referencia, para que sea claro» (n. 84 VCDF).

3.1. *Certeza moral para condenar y declarar la inocencia*

El c. 1608 § 1 del CIC ordena que el juez alcance la certeza moral, sobre el asunto que debe dirimir, para dictar cualquier sentencia. En el

¹¹⁵ Cfr. V. DE PAOLIS, *sub c. 1348*, ComExe, IV/1, 417; V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa...*, cit., 224-225; C. PAPALE, *Il processo penale...*, cit., 102-103.

¹¹⁶ V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa...*, cit., 253.

¹¹⁷ Cfr. Ch. J. SCICLUNA, *Delicta graviora ius processuale*, en ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (ed.), *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012, 86.

¹¹⁸ Cfr. SCSO, Instr. *Crimen sollicitationis...*, cit.

¹¹⁹ *Ibid.*, 18.

ánimo del juez que da la sentencia en el proceso penal se requiere haber alcanzado la certeza moral “circa rem sententia definiendam”, esto es, sobre la culpabilidad¹²⁰ o declaración de inocencia¹²¹ del reo.

Se puso de manifiesto por la doctrina que la expresión “cuiuslibet sententiae” del § 1 del canon no era totalmente precisa porque la certeza moral se requiere para las sentencias estimatorias de la pretensión del actor y no para las desestimatorias¹²². Pero en realidad parece que al § 1 canon no le interesa tanto la parte procesal a quien favorece la sentencia, como la materia sobre la que se decide (“circa rem sententia definiendam”), por eso pensamos que es más correcta la interpretación que sostiene que la certeza moral se requiere cuando el juez decide a favor de cualquier pretensión de parte, si se resuelve por sentencia. Esto incluye, por tanto, la acusación del promotor de justicia, pero también las excepciones del acusado¹²³, pues «a veces cabe prever la posibilidad de sentencias desestimatorias, no porque falte la certeza moral acerca de lo pretendido por el actor [promotor de justicia] según el supuesto descrito por el § 4 del c. 1608, sino porque el juez adquirió certeza moral acerca de los hechos que han servido al demandado [acusado] como supuestos en que fundar la excepción»¹²⁴.

El § 4 del c. 1608 sí que pone su foco sobre el actor al prescribir que «si no hubiera alcanzado esa certeza, el juez ha de sentenciar que no consta el derecho del actor y ha de absolver al demandado, a no ser que se trate de una causa que goza del favor del derecho, en cuyo caso debe pronunciarse en pro de esta». Y precisamente este cambio de perspec-

¹²⁰ «*Decisio / Sententia Condemnatoria: si auctor certus sit de crimine*. In questo caso l'autore della decisione viene alla certezza morale della colpevolezza del reo»: Ch. J. SCICLUNA, *Delicta graviora...*, cit., 86.

¹²¹ «*Decisio / Sententia Absolutoria: si auctor certus sit de innocentia*. In questo caso l'autore della decisione viene alla certezza morale dell'innocenza del reo. Il CIC c. 1726 impone l'obbligo di pronunciare sentenza assolutoria in questi casi»: *ibíd.*

¹²² Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *La certezza morale...*, cit., 418, donde cita a Lüdicke, para el que el enunciado del § 1 es lógicamente falso al afirmar que la *moralis certitudo* es necesaria para emitir cualquier juicio.

¹²³ Son excepciones perentorias *litis finitae* para las causas penales la muerte del reo, el indulto por parte de la autoridad eclesiástica, la extinción de la acción penal. Además, puede interponerse la excepción de cosa juzgada. Deben proponerse y tratarse antes de la *litis contestatio* (c. 1462 § 1).

¹²⁴ C. DE DIEGO LORA, *sub c. 1608*, ComExe, IV/2, 1538.

tiva facilita que pueda criticarse la norma del § 4. Si hubiera continuado con el mismo punto de vista del § 1 podrían explicarse mejor algunos fenómenos peculiares en los que el juez, por falta de certeza moral en un mismo proceso, ni estima las excepciones del demandado ni da la razón a la pretensión del actor, porque en realidad «las afirmaciones de partes (...) se transformaron en peticiones concretas. Y esas afirmaciones requerirán las pruebas oportunas (c. 1526 § 1) para que el juez adquiera acerca de ellas la certeza moral necesaria para que sea correctamente dictada la sentencia»¹²⁵. Si la causa goza del favor del derecho, la ausencia de certeza moral en el juez acerca de las afirmaciones contrarias al *favor iuris*, determinarán que la sentencia sea en beneficio de la parte que esté favorecida por la certeza legal que no se ha conseguido destruir.

En los procesos penales se requiere, como en todos los demás procesos en la Iglesia, la certeza moral del juez para dictar sentencia (c. 1608 § 1) condenatoria y absolutoria. Encontramos, además, en el CIC una norma específica en la que el legislador ordena que «en cualquier grado y fase del juicio penal, si consta de modo evidente que el delito no ha sido cometido por el reo, el juez debe declararlo así mediante sentencia y absolver al reo, aunque conste a la vez que se ha extinguido la acción criminal» (c. 1726).

Por tanto, se requiere certeza moral en el ánimo del juez o tribunal penal o del Ordinario o su Delegado para dictar sentencia o decreto condenatorio en el que se declara culpable al encausado, estimando la petición de condena del promotor de justicia plasmada en el escrito de acusación. La certeza recaerá tanto sobre la calificación delictiva de los hechos como de su autoría. En esos casos, explica el VCDF «se deberá indicar específicamente el tipo de sanción canónica infligida o declarada» (n. 84).

También es necesaria la certeza moral para el veredicto de inocencia del acusado (“non constat”¹²⁶). No es una absolución, a tenor del c. 1608 § 4, por falta de acreditación de la acusación, sino que el tribu-

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ «En caso de decreto absolutorio, la fórmula “non constat” podría ser interpretada como dubitativa, si no se le añaden otros términos que indiquen certeza, por lo cual sería mejor no usarla. Pero si se usa, debe entenderse como absolución plena o como proclamación de la inocencia del acusado»: A. CALABRESE, *sub c. 1720*, ComExe, IV/2, 2081.

nal ha llegado, sin duda razonable contraria, a la certeza de que no es culpable¹²⁷. Por eso añade el n. 84 del VCDF: «si consta con certeza moral la no culpabilidad del acusado, en cuanto que el hecho no subsiste, o el imputado no lo ha cometido, o el hecho no está tipificado por la ley como un delito o fue cometido por una persona no imputable».

El c. 1726 manda absolver al reo, es decir, declararle inocente, «si consta de modo evidente que el delito no ha sido cometido por el reo». Dicha declaración debe hacerse por sentencia: «debe declararlo así mediante sentencia», dice el canon. ¿Esto quiere decir que el legislador exige en ese canon un estándar de certeza mayor que el del c. 1608 § 1? La evidencia es la presencia ante el juez de una realidad que se presenta como inequívoca y claramente dada. La patencia de la verdad. Propiamente hablando, y desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, la evidencia que enuncia el canon es una evidencia extrínseca, es decir, aquella en que la verdad no se presenta desde sí misma, porque el juez no conoce la realidad. Pero se puede hablar de «una cierta evidencia cuando los medios por los que nos llega, los testimonios, los signos, las huellas que ha dejado, cobran tal fuerza que la verdad del hecho se impone a nuestra mente. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las realidades históricas. No las podemos presenciar, pero la concordancia de los testigos, la coherencia de los hechos, etc., pueden apoyar los juicios sobre ellas sin dar lugar a dudas»¹²⁸.

En un sentido procesal, la evidencia supone que la «prueba de la inocencia debe emerger de los actos de modo incontestable, manifestándose como verdad procesal indiscutible, por lo que la valoración que debe hacer el tribunal a este respecto es más una cuestión de simple observación que de estimación»¹²⁹. En efecto, la evidencia proporciona una seguridad inquebrantable en el conocimiento. Pero como existe la posibilidad de estar cierto de algo que no es verdadero¹³⁰, la exigencia de la “consideración crítica”¹³¹ de lo alegado y probado (c. 1608 § 2) es necesaria en todo caso, porque el juez debe justificar ante sí mismo su decisión por evidente que

¹²⁷ Cfr. C. PAPALE, *Il processo penale...*, cit., 150.

¹²⁸ J. I. MURILLO, *Filosofía del conocimiento*, ISCR, Pamplona 2010, 103-104.

¹²⁹ C. PAPALE, *Il processo penale...*, cit., 151.

¹³⁰ Cfr. J. I. MURILLO, *Filosofía del conocimiento...*, cit., 104.

¹³¹ R. COPPOLA, *sub c. 1726*, ComExe, IV/2, 2098.

le parezca, para que la sentencia esté presidida por la pretensión de racionalidad y verdad. En resumen: «el tenor de la norma impone al juez la obligación de recabar diligentemente, “ex actis et probatis”, la convicción de que el delito no fue cometido. Solo cuando esto resulte con toda certeza de la consideración crítica de los datos de que dispone (“evidenter”, reza el texto de la norma), debe declararlo con sentencia, en cualquier grado o estadio del juicio, y debe absolver al imputado»¹³².

La evidencia no suplanta la certeza moral, sino que es un medio para llegar a ella con argumento más sólidos y consistentes. La sentencia de inocencia, en estos supuestos, “debet” incluso dictarla el tribunal aunque conste la extinción de la acción criminal¹³³. Esta preferencia de la declaración de inocencia a la de extinción de la acción penal es explicable porque la extinción no resuelve las dudas, si existieran, de la inocencia del acusado¹³⁴, y «es exigencia del acusado a ser rehabilitado en su buena fama, lesionada por el hecho mismo del proceso penal»¹³⁵.

La reforma del Libro VI del CIC propiciada por la const. ap. PGD del santo padre Francisco trae algunas novedades en relación con la extinción de la acción penal, mientras que sobre la prescripción de la ejecución de la pena del c. 1363 no hay cambios. La comparación entre los dos textos del c. 1362 es reveladora de que se han introducido no pocas novedades¹³⁶.

¹³² *Ibid.*

¹³³ El c. 1362 CIC 83 determina la extinción de la acción criminal. Sobre la extinción de la acción penal en el CIC 83 y algunas cuestiones discutidas que presenta, cfr. C. PAPALE, *Il processo penale...*, cit., 116-123; D. CITO, *La prescrizione in materia penale*, en D. CITO (ed.), *Processo penale...*, cit., 209-233; J. L. SÁNCHEZ-GIRÓN, *Algunos interrogantes en la disciplina codicial sobre la prescripción de la acción criminal*, en J. KOWAL – J. LLOBELL (eds.), «*Iustitia et iudicium*» *studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, vol. IV, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, 2167-2185; J. LLOBELL, *Sull'interruzione e sulla sospensione della prescrizione dell'azione penale*, *Ius Ecclesiae* 25 (2013) 641-662. Para los modos de extinción de las acciones en general y la distinción entre prescripción y caducidad como modos de extinción de las acciones, cfr. C. DE DIEGO LORA – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Leciones de Derecho...*, cit., 103-109.

¹³⁴ Cfr. C. PAPALE, *Il processo penale...*, cit., 151.

¹³⁵ F. LOZA, *sub c. 1726*, CICPamplona.

¹³⁶ La Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo con la Facultad de Derecho Canónico del Instituto Católico de París organizó, el 14 de septiembre de 2021, un Webinar sobre el nuevo libro VI del CIC, dos de las ponencias trataron

El c. 1362 del nuevo libro VI del CIC ha cambiado los plazos de extinción de la acción criminal. En efecto, dependiendo del tipo de delito, los plazos son 3, 7 y 20 años:

La acción criminal se extingue a los tres años (c. 1362 § 1) con excepción de: a) los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la fe; b) se eleva a siete años (cfr. c. 1362 § 2) el plazo de extinción de los delitos de los cc. 1376, 1377, 1378, 1393 § 1, 1394, 1395, 1397 y 1398 § 2. Los cc. 1376-1378 son delitos contra las autoridades eclesíásticas y el ejercicio de los cargos (sustracción de bienes eclesíásticos, enajenación de estos sin licencia, soborno, cohecho, abuso de potestad); los cc. 1393 § 1, 1394, 1395 son delitos contra obligaciones especiales de clérigos o religiosos (ejercicio del comercio, delitos en materia económica, atentado de matrimonio, concubinato, delitos público contra el sexto mandamiento o cometido con violencia, abuso de autoridad, etc.); por último el c. 1398 § 2 es un delito nuevo: «Si un miembro de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de vida apostólica, o cualquier fiel que goza de alguna dignidad o desempeña un oficio o una función en la Iglesia, comete uno de los delitos enumerados en el § 1 o en el c. 1395 § 3, debe ser castigado conforme al c. 1336 §§ 2-4, añadiendo también otras penas según la gravedad del delito»; c) el plazo de extinción de extiende hasta los 20 años para los delitos del nuevo c. 1398 § 1¹³⁷.

El tiempo de prescripción por derecho común (a no ser que se establezca otra cosa en la ley) se cuenta desde el día en el que se cometió el delito, o, cuando se trata de un delito continuado o habitual, a partir del día en que cesó.

El § 3 del c. 1362 es nuevo en el libro VI del CIC y resuelve algunas de las cuestiones que la doctrina se había planteado en relación con la extinción de la acción penal¹³⁸. El cómputo de los plazos de extinción se regula en estos términos: a) la investigación previa (c. 1717) no inte-

de la prescripción, cfr. D. CITO, *La prescrizione penale nel nuovo libro VI*, y Ph. TOXÉ, *Le novità sulla prescrizione nel nuovo diritto penale canonico*. Las intervenciones escritas están disponibles en <http://www.consociatio.org/webinar-2021/webinar-1.htm>.

¹³⁷ Para un comentario del nuevo canon, cfr. Webinar sobre el nuevo libro VI del CIC, D. ASTIGUETA, *Il canone 1398*. La intervención escrita está disponible en <http://www.consociatio.org/webinar-2021/webinar-1.htm>.

¹³⁸ Cfr. J. L. SÁNCHEZ-GIRÓN, *Algunos interrogantes...*, cit.

rumpe el transcurso del plazo fijado para la extinción de la acción penal, el cómputo se detiene solo cuando es citado el reo (c. 1723) o comparece ante el tribunal para tratar de la causa (c. 1507 § 3); b) la suspensión del plazo no puede superar los tres años, si en ese tiempo la causa no ha finalizado o cesó el proceso penal, el tiempo vuelve a correr añadiéndose al ya transcurrido hasta que el reo fue citado o compareció; c) esa suspensión rige igualmente para el procedimiento administrativo penal del c. 1720, 1.º.

La decisión absolutoria propiciada por el c. 1726 se adoptará en cualquier grado y fase del juicio con el fin de evitar un posterior planteamiento de la acusación –con los gastos que eso comportaría– cuya resolución difícilmente podría ser contraria por radicar la causa de la certeza moral del tribunal o juez sobre la inocencia del acusado en la evidencia de no haberse cometido el delito¹³⁹.

3.2. *Sentencia absolutoria y presunción de inocencia*

Cuando no se ha alcanzado la certeza moral ni para condenar ni para declarar la inocencia, la sentencia será desestimatoria de la acusación, declarando que “non constat” la culpabilidad del acusado¹⁴⁰. El VCDF llama a esta decisión “dimisoria”¹⁴¹. Dice el c. 1608 § 4 que «si no hubiera alcanzado esa certeza, el juez ha de sentenciar que no consta el derecho del actor y ha de absolver al demandado, a no ser que se trate de una causa que goza del favor del derecho, en cuyo caso debe pronunciarse en pro de esta», aunque el propio acusado no haya conseguido probar su inocencia más allá de la presunción a su favor por la que, mientras no exista sentencia en contrario, al acusado se le debe considerar inocente.

¹³⁹ Cfr. C. PAPALE, *Il processo penale...*, cit., 151.

¹⁴⁰ «*Decisio / Sententia Dimissoria: si auctor ex defectu probationum sit invincibiliter dubius*. In questo caso l'autore della decisione non si sente in grado di esprimersi con certezza morale sia per la colpevolezza che per l'innocenza del reo. Il CIC c. 1608 § 4 impone la *dimissio* della causa contro il reo in questi casi. Questa *dimissio* non va confusa con la pena della dimissione dallo stato clericale. Si tratta infatti della *dimissio causae*, non della *dimissio rei e statu clericali*»: Ch. J. SCICLUNA, *Delicta graviora...*, cit., 86.

¹⁴¹ La palabra “dimisoria” en singular no existe en castellano. Es un italianismo que proviene del verbo *dimettere* «lasciar andare, far uscire, specialmente da ospedali o carceri»: *Dizionario della Lingua Italiana*, ed. Garzanti linguistica: <https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=dimettere>. Última consulta, 1-IX-2021.

Se ha argumentado que la presunción de inocencia funciona como un «principio general orientador de la convicción judicial acerca de la inocencia, que trata de alejar al juez del prejuicio social de culpabilidad»¹⁴². Aunque la razón puede estar basada en una visión pesimista de la persona, se le debe reconocer parte de acierto, pues conocidas las medidas preventivas que se toman nada más iniciada la investigación previa y divulgados a la prensa los posibles actos delictivos (en especial si son *contra sextum*) imputables al denunciado, la culpabilidad de este –antes de cualquier decisión judicial– es una tentación en la que fácilmente se puede caer, como se constata con alguna frecuencia. La sociedad no ha cambiado mucho en este sentido. El libro de Daniel relata la falsa acusación de Susana y su condena que no llegó a materializarse por la intervención Daniel (cfr. Dn 13). En el Evangelio encontramos una violación flagrante de la presunción de inocencia con la condena de Jesucristo (cfr. Jn 18 y 19), precisamente presionado por el prejuicio social.

La presunción de inocencia debe estar tan arraigada en el juez que, a ser posible, le vuelva inmune a las condenas públicas en las que el denunciado parte como culpable y se le exige que pruebe su inocencia. Por eso la necesidad de conocer la verdad y sustentarla con pruebas, se atisba ya en textos arcaicos¹⁴³ como el código de Hammurabi, en este caso, de una forma radical según su ley § 3 por la que si un hombre acude ante un tribunal con falso testimonio y luego no prueba su declaración, si se trata de un caso con pena de muerte, ese hombre será ejecutado¹⁴⁴; o el código más antiguo hebreo, el de la Alianza¹⁴⁵ donde se prescribe «no violarás el derecho del indigente en su pleito. Mantente alejado de cau-

¹⁴² J. NIEVA FENOLL, *La razón de ser de la presunción de inocencia*, InDret, n. 1, 2016, 14: <https://ssrn.com/abstract=2737834>. Última consulta, 1-IX-2021. Para otros la presunción de inocencia tiene una doble razón de ser: proteger al inocente y la promoción del imperio de la ley, cfr. A. STUMER, *La presunción de inocencia. Perspectiva desde el derecho probatorio y los derechos humanos*, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-São Paulo 2018, especialmente 49-62.

¹⁴³ Sobre el origen de la presunción de inocencia, cfr. el ya citado K. PENNINGTON, *Innocente fino a...*, cit., 33-61.

¹⁴⁴ *Código de Hammurabi*, 4.^a ed, estudio preliminar, traducción y comentarios de F. LARA PEINADO, Tecnos, Madrid 2008, 7.

¹⁴⁵ Sobre los tres códigos que se integran en la Torah, cfr. F. VARO, *Elementos antropológicos y éticos en el derecho penal de la Biblia Hebrea*, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos 42 (2020) 69.

sas falsas; no harás morir al inocente y al justo, porque yo no absolveré al culpable. No aceptarás soborno, porque el soborno ciega a los prudentes y pervierte las causas de los justos» (Ex 23,6-8). Antecedentes romanos de la presunción de inocencia han sido aducidos en la jurisprudencia de los Estados Unidos de América, en la ya citada sentencia *Coffin v. United States*¹⁴⁶. Todavía cabe añadir, sin intención de exhaustividad, como antecedente de la presunción de inocencia el texto del Digesto según el cual nadie debía ser condenado por sospechas, porque es mejor que se deje impune el delito de un culpable que condenar a un inocente¹⁴⁷.

Esta presunción (que se parece más a un principio que a una presunción propiamente dicha porque no tiene un hecho previo cierto en el que se basa la conjetura¹⁴⁸) ejerce su influjo, primero, en el tratamiento del investigado y del acusado durante el juicio¹⁴⁹; segundo, en el momento procesal de la prueba excluyendo al acusado de toda obliga-

¹⁴⁶ Cfr. 156 U.S. 432 (1895), n. 741: <https://bit.ly/35nHXff>. Última consulta, 1-IX-2021.

¹⁴⁷ Digesto 48,19,5,pr: «Ulpianus libro séptimo de officio proconsulis: pr. Absentem in criminibus damnari non debere divus Traianus Iulio Frontoni rescripsit. Sed nec de suspicionibus debere aliquem damnari divus Traianus Adsidio Severo rescripsit: satius enim esse impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari». P. RESINA SOLA (ed.), «*Fundamenta iuris*». Terminología, principios e «interpretatio», Universidad de Almería, Almería 2012, 378.

¹⁴⁸ Cfr. A. S. SÁNCHEZ-GIL, *El principio 'in dubio pro reo'...*, cit., 3 nota 5; F. FRANCESCHI, «Inocencia [presunción de]», DGDC, IV, 601. Misma idea mantienen los juristas civiles: «Aunque se la llame presunción, ni siquiera lo es, al no estar basada, *a priori*, en indicio alguno. En realidad, no es sino un principio general del proceso penal, que le sirve de guía al juez para orientar su labor»: J. NIEVA FENOLL, *La razón de ser de la presunción...*, cit., 14.

¹⁴⁹ «Como regla de tratamiento del imputado en el transcurso del proceso penal, particularmente, el principio en cuestión está destinado a impedir que, mientras dure el juicio, se considere al imputado culpable, y a evitar, por tanto, que se le apliquen procedimientos y medidas represivas, incompatibles con su posible inocencia, derivadas de la identificación entre acusado y culpable. Puede pues decirse que, en el fondo, sirve como regla fundamental de salvaguardia, fijando el límite teleológico de las posibles medidas restrictivas que, en su caso, se podrían adoptar en lo referente al acusado. Desde este punto de vista, el principio de presunción de inocencia hay que aplicarlo siempre, incluso en los casos en los que haya una alta probabilidad de que el acusado sea culpable»: F. FRANCESCHI, «Inocencia [presunción de]...», cit., 600. La jurisprudencia y la doctrina seculares señalan como posibles violaciones de la presunción de inocencia el rechazo de la libertad provisional bajo fianza, la publicación del nombre de un acusado antes de la condena, la toma de algunas medidas cautelares sin pruebas, cfr. A. STUMER, *La presunción de inocencia...*, cit., 17.

ción de probar su inocencia presumida por el legislador para hacer recaer el *onus probandi* sobre el promotor de justicia (c. 1526 § 1); y tercero, si no se acredita la acusación, debe absolverse al encausado¹⁵⁰.

Hasta VELM del papa Francisco¹⁵¹, no se hallaba en el ordenamiento canónico una expresa formulación legal de la presunción de inocencia. Es el art. 12 § 7 VELM el primero que explícitamente la reconoce aunque sea en un marco previo al proceso penal (cfr. nn. 33 y 42 VCDF) en el que se sitúa la investigación previa (c. 1717) ante la noticia de un posible delito. Después de VELM, el n. 45 del VCDF, sobre los comunicados públicos acerca de posibles *delicta graviora*, señala que deben abstenerse «de todo juicio anticipado sobre la culpabilidad o inocencia de la persona denunciada –que será establecida por el proceso penal si este llega a realizarse, siendo el único al que corresponde verificar el fundamento de hechos denunciados–». Bajo la inspiración de VELM, el reformado libro VI del CIC ha formalizado la presunción de inocencia en el nuevo c. 1321 § 1 en los siguientes términos: «Toda persona es considerada inocente mientras no se pruebe lo contrario». Por tanto, debe ser tratado como inocente hasta que se pruebe su culpabilidad; la carga de la prueba recae sobre quien sostiene la acusación; si esta no consigue acreditarse, el acusado debe ser absuelto¹⁵².

Aunque la presunción de inocencia no ha tenido hasta ahora tan expresa normativa, la doctrina ha puesto de relieve su vigencia en el ordenamiento canónico. Se ha estudiado su origen y su presencia en la historia canónica¹⁵³; el magisterio papal lo ha recordado en sus inter-

¹⁵⁰ Cfr. F. FRANCESCHI, «Inocencia [presunción de]»..., cit., 600-601. Para un estudio de la presunción de inocencia desde el derecho probatorio, cfr. el volumen de A. STUMER, *La presunción de inocencia*..., cit.

¹⁵¹ «A la persona investigada se le reconoce la presunción de inocencia» (art. 12 § 7 VELM). En una ley anterior para el Estado de la Ciudad del Vaticano se garantiza «agli imputati il diritto a un processo equo e imparziale, nel rispetto della presunzione di innocenza, nonché dei principi di legalità e di proporzionalità fra il reato e la pena»: FRANCISCO, Lettera ap. in forma di Motu proprio *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26-III-2019, L'Osservatore Romano, 30-III-2019, 6-7.

¹⁵² Cfr. A. S. SÁNCHEZ-GIL, *El principio 'in dubio pro reo'*..., cit., 1-2.

¹⁵³ Cfr. K. PENNINGTON, *Innocentia fimo a...*, cit., 33-61; R. M. FRAHER, «*Ut nullus describatur reus prius quam convincatur*»: *Praesumption of innocent in medieval canon law?*, en S. KUTTNER – K. PENNINGTON (eds.), *Proceedings of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law*, Berkeley, California, 28 July-2 August 1980, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1985, 493-506.

venciones¹⁵⁴; se han mostrado sus múltiples manifestaciones en el derecho de la Iglesia¹⁵⁵; la jurisprudencia de la Signatura la ha invocado en el argumentario de sus sentencias¹⁵⁶; y, en fin, la jurisprudencia de la Rota Romana también se ha basado en ese principio¹⁵⁷.

4. CONCLUSIÓN

Hemos intentado poner de manifiesto que, en el camino hasta alcanzar la certeza moral, aparecen obstáculos que el juez o tribunal deben afrontar no de cualquier manera, sino teniendo en cuenta, como se ha apuntado en el inicio de estas páginas, que la certeza moral es la clave de lectura que proporcionará los elementos para darles una correcta solución. En efecto, la concepción de la certeza moral en sede canónica supone en el juez la valentía para criticar los propios planteamientos con el fin de desechar toda duda positiva de error, la humildad para no dejarse llevar por intuiciones voluntaristas, la intervención *ex officio* siempre en búsqueda de la verdad fáctica, la valoración en conciencia de las pruebas pero razonada jurídicamente, no por puro arbitrio, la imparcialidad ante las posiciones de parte y, en fin, el respeto a las garantías del proceso justo para mostrar que la certeza moral fue alcanzada por vías de justicia y prudencia.

¹⁵⁴ Cfr. Pío XII, *Allocutio iis qui* (1953)..., cit., 737, n. IV; IDEM, *Nuntia iis qui* (1954)..., cit., 65-67.

¹⁵⁵ Cfr. A. S. SÁNCHEZ-GIL, *El principio 'in dubio pro reo'*..., cit., 5-11; F. FRANCESCHI, «Inocencia [presunción de]»..., cit., 600-603; U. NAVARRETE, «Favore del diritto (Favor iuris)», en C. CORRAL – V. DE PAOLIS – G. GHIRLANDA, *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1993, 493-494; F. J. CAMPOS, *La presunción de inocencia e investigación previa canónica. Pautas para un procedimiento justo en denuncias por abuso sexual*, *Periodica* 108 (2019) 471-516.

¹⁵⁶ Cfr. SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, Sentencia definitiva. Diocesis N. (Rev.dus [X] – Congregatio pro Clericis), 20-VI-2013, prot. n. 45481/11 CA, n. 11, *Monitor Ecclesiasticus* 132 (2017) 394; IDEM, Sentencia definitiva. Revocatiois decreti poenalis ab Exc.mo Episcopo d. 6 Maii a. 1999 adversus Rev.dum X lati (Exc.mus Ordinarius - Congregatio pro Clericis), 3-VII-2004, prot. n. 32372/01 CA, n. 5, *Ius Canonicum* 59 (2019) 295.

¹⁵⁷ «Quando manca una prova moraliter certa il reo si debba assolvere»: V. PALESTRO, *Le sentenze penali*..., cit., 336. «Nè è sufficiente "ex se ipsa" una grave presunzione di colpevolezza in quanto "criminalibus"»: *ibid.*, 388.

Bibliografía

- ALISTE SANTOS, T. J., *Relevancia del concepto canónico de “certeza moral” para la motivación judicial de la “quaestio facti” en el proceso civil*, *Ius Ecclesiae* 22 (2010) 651-672.
- ALISTE SANTOS, T. J., *La «certeza moral» como criterio fundamental de racionalidad judicial probatoria*, *Academia & Derecho* 2 (2011) 39-50.
- ALONSO, S. – CABREROS, M., *Comentarios al Código de Derecho Canónico*, III, BAC, Madrid 1964.
- ARIANO, C., *Il principio del contraddittorio. Lineamenti comparativi tra processo italiano e canonico*, *Prudentia Iuris* 84 (2017) 165-189.
- ARROBA, M. J., *Diritto processuale canonico*, 7.ª ed., EDIURCLA, Roma 2020.
- ARROBA, M. J., *Convincimento, certezza e motivazione: l’esperienza canonica*, *Criminalia* 7 (2012) 163-179.
- ASTIGUETA, D. G., *Sentenza, certezza e motivazione nel processo penale*, *Periodica* 108 (2019) 671-705.
- BIANCHI, P., *Il servizio alla verità nel processo matrimoniale*, *Ius Canonicum* 57 (2017) 83-104.
- BONNET, P. A., *sub c. 1452*, en Á. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, IV/1, 3.ª ed., Eunsa, Pamplona 2002, 935.
- BONNET, P. A., *Le prove nel giudizio ecclesiale*. Parte prima, *Periodica* 98 (2009) 235-273; Parte seconda, *Periodica* 98 (2009) 399-461.
- CABREROS, M., *sub c. 1869*, en L. MIGUÉLEZ – S. ALONSO – M. CABREROS, *Código de Derecho Canónico y legislación complementaria*, BAC, Madrid 1969.
- CALABRESE, A., *sub c. 1720*, en Á. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, IV/2, 3.ª ed., Eunsa, Pamplona 2002.
- CAMPOS, F. J., *La presunción de inocencia e investigación previa canónica. Pautas para un procedimiento justo en denuncias por abuso sexual*, *Periodica* 108 (2019) 471-516.
- CAPELLO, F. M., *Summa iuris canonici in usum scholarum concinnata*, III: *De processibus, delictis et poenis*, 4.ª ed., apud aedes Universitatis Gregorianae, Romae 1955.

- CARNELUTTI, F., *Cómo se hace un proceso*, Edeval, Valparaíso 1979.
- CARNELUTTI, F., *La prueba civil*, 2.^a ed., Depatma, Buenos Aires 1982.
- CITO, D., *La prescrizione in materia penale*, en D. CITO (ed.), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè editore, Milano 2005, 209-233.
- CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, *Vademécum sobre algunas cuestiones procesales ante los casos de abuso sexual a menores cometidos por clérigos*, 16-VII-2020, <https://bit.ly/3uNJg1W>. Última consulta, 1-IX-2021.
- CONTE A CORONATA, M., *Institutiones iuris canonici*, III: *de processibus*, 3.^a ed., Domus Editorialis Marietti, Taurini-Romae 1948.
- COPPOLA, R., *sub c. 1726*, en Á. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, IV/2, 3.^a ed., Eunsa, Pamplona 2002.
- CORDÓN MORENO, F., *Introducción al Derecho Procesal*, Eunsa, Pamplona 2020.
- DE DIEGO-LORA, C. – RODRÍGUEZ-OCAÑA, R., *Lecciones de Derecho Procesal Canónico. Parte general*, 2.^a ed., Eunsa, Pamplona 2020.
- DE DIEGO-LORA, C., *La apreciación de las pruebas de documentos y confesión judicial en el proceso de nulidad de matrimonio*, *Ius Canonicum* 7 (1967) 529-537.
- DE DIEGO-LORA, C., *sub c. 1608*, en Á. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, IV/2, 3.^a ed., Eunsa, Pamplona 2002.
- DE DIEGO-LORA, C., *Carga de la prueba, su inversión y presunciones al servicio de la verdad en el proceso canónico*, en J. APECECHEA – J. VESPERINAS (eds.), «*Veritas in Caritate*». *Miscelánea homenaje a Mons. Fernando Sebastián Aguilar*, Verbo Divino-Arzobispado de Pamplona y Tudela, Pamplona 2006, 439-467.
- DE DIEGO-LORA, C., *sub c. 1605*, en INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA (ed.), *Código de Derecho Canónico*. Edición bilingüe y anotada, 10.^a ed., Eunsa, Pamplona 2021.
- DE LEÓN, E., *Publicación de las actas, privacidad de los hechos y prueba secreta (c. 1598 § 1 CIC'83 / art. 230 DC)*, en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

- DE CANONISTAS (eds.), *Procesos matrimoniales canónicos*, Dykinson, Madrid 2014, 157-169.
- DE PAOLIS, V. – CITO, D., *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro VI*, Urbaniana University Press, Roma 2000.
- DE PAOLIS, V., *sub c. 1348*, en Á. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, IV/1, 3.ª ed., Eunsa, Pamplona 2002.
- DELLA ROCCA, F., *Instituciones de derecho procesal canónico*, Desclée de Brouwer, Buenos Aires 1950.
- DELLA ROCCA, F., *Saggi di diritto processuale canonico*, CEDAM, Padova 1961.
- DOTTI, F., *Diritti della difesa e contraddittorio: garanzia di un giusto processo? Spunti per una riflessione comparata del processo canonico e statale*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2005.
- ERDÖ, P., *La certezza morale nella pronuncia del giudice. Problemi attuali*, *Periodica* 87 (1988) 81-104.
- FAIRÉN GUILLÉN, V., *Sentencia del caso “Barbera, Messegue y Jabardo”*: *Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, *Revista de derecho procesal* 2 (1989) 295-352.
- FRAHER, R. M., «*Ut nullus describatur reus prius quam convincatur*»: *Praesumption of innocent in medieval canon law?*, en S. KUTTNER – K. PENNINGTON (eds.), *Proceedings of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law*, Berkeley, California, 28 July-2 August 1980, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1985, 493-506.
- FRANCESCHI, F., «Inocencia [presunción de]», en J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, IV, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2012.
- FRANCESCHI, H., *L’impugnazione del giudicato nel processo penale: «restitutio in integrum» o «nova causae propositio»*, *Ius Ecclesiae* 7 (1995) 676-689.
- GAS, M., «La carga de la prueba», en J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, I, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2012.
- GASCÓN ABELLÁN, M., *Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba*, Marcial Pons, Madrid 2010.

- GHERRO, S., *Sul processo matrimoniale canonico: «pubblicazione degli atti» e dibattito*, *Il Diritto Ecclesiastico* 105 (1994) II, 486-500.
- GHERRO, S., *Il principio del contraddittorio tra l'ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali. Roma L.U.M.S.A., 13 aprile 2002*, CEDAM, Padova 2003.
- GIACCHI, O., *La certezza moral nel giudizio ecclesiastico*, en PONTIFICIA UNIVERSITAS GREGORIANA, *Ius Populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor*, vol. II, Università Gregoriana, Roma 1972, 605-620.
- GROCHOLEWSKI, Z., *La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali*, *Ius Ecclesiae* 9 (1997) 417-450.
- GUASP, J., *Derecho procesal civil*, I, 4.^a ed., Civitas, Madrid 1998.
- GULLO, C., *La pubblicazione degli atti e la discussione della causa*, en P. A. BONNET – C. GULLO (eds.), *Il processo matrimoniale canonico*, 2.^a ed., Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1994, 677-693.
- JUAN PABLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 4-II-1980, AAS 72 (1980) 172-178.
- JUAN PABLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26-I-1989, AAS 81 (1989) 924.
- JUAN PABLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 29-I-2005, AAS 97 (2005) 164-166.
- LAUDAN, L., *Is Reasonable Doubt Reasonable?*, *Legal Theory*, Volume 9, Issue 4, December 2003, 295-331. Published online by Cambridge University Press, 14 April 2004. DOI: <https://doi.org/10.1017/S1352325203000132>. Última consulta, 1-IX-2021.
- LAZZARATO, D., *Il promotore della giustizia esercita funzioni giurisdizionali?*, *Il Diritto Ecclesiastico* 48 (1937) 366-368.
- LEGA, M. – BARTOCETTI, V., *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, III, A.L.C.I., Romae 1950.
- LLOBELL, J., *Historia de la motivación de la sentencia canónica*, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Zaragoza 1985.
- LLOBELL, J., *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, *Ius Ecclesiae* 16 (2004) 363-386.

- LLOBELL, J., *El valor jurídico de la instr. «Dignitas connubii», su recepción eclesial, el objeto y la conformidad de la sentencia, y la certeza moral*, en R. RODRÍGUEZ-OCAÑA – J. SEDANO, *La instr. «Dignitas connubii» sobre los procesos de nulidad matrimonial*, Actas del XXIV Curso de Actualización en Derecho Canónico de la Facultad de Derecho Canónico (Pamplona, 24-26 octubre de 2005), 2.^a ed., Eunsa, Pamplona 2007, 235-301.
- LLOBELL, J., *La pubblicazione degli atti, la «conclusio in causa» e la Discussione della causa (istruzione «dignitas connubii», titolo IX, artt. 229-245). Ancora sul diritto di difesa delle parti in causa*, en P. A. BONNET – C. GULLO (eds.), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii». Parte terza: la parte dinamica del processo*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008, 509-558.
- LLOBELL, J., *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Archivio Giuridico «Filippo Serafini» 232 (2012) 165-224 (parte prima); 293-357 (parte seconda).
- LLOBELL, J., *La certezza morale sulla «quaestio facti» e sulla «quaestio iuris» de nelle cause di nullità del matrimonio quale istituto assiologico trascendente l'istr. «Dignitas connubii»*, Ius Ecclesiae 27 (2015) 479-481.
- LÓPEZ FIDALGO, J., *El azar no existe*, Electrolibris, Murcia 2015.
- LOZA, F., *sub c. 1726*, en INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA (ed.), *Código de Derecho Canónico*, Edición bilingüe y anotada, 10.^a ed., Eunsa, Pamplona 2021.
- MARCELLINUS, A., *Rerum gestarum libri decem et octo*, Apud Seb. Gryphium, Lugd[uni] 1552.
- MCCARTHY, E. A., *De certitudine morali quae in iudicis animo ad sententiae pronuntiationem requiritur*, Officium Libri Catholici, Roma 1948.
- MOGAVERO, D., *I pronunciamenti del giudice*, en GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), *I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale*, XXIV Incontro di studio Villa Luzzago-Ponte di Legno (BSD), 30 giugno-4 luglio 1977, Glossa, Milano 1998, 151-187.
- MOSCONI, M., *L'indagine previa e l'applicazione della pena in via amministrativa*, GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (eds.), *Processi e procedure speciali*, XXV Incontro di studio Villa S. Giuseppe, Torino, Glossa, Milano 1999, 191-228.

- MUNIZ, T., *Procedimientos eclesiásticos*, III, 2.^a ed., Imp. y Lib. de Sobri-
no e Izquierdo, Sevilla 1926.
- MURILLO, J. I., *Filosofía del conocimiento*, ISCR, Pamplona 2010.
- NAVARRETE, U., «Favore del diritto (Favor iuris)», en C. CORRAL –
V. DE PAOLIS – G. GHIRLANDA, *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*,
San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1993.
- NAVARRO-VALLS, R., *Los fundamentos de la sentencia canónica*, *Ius Cano-
nicum* 15 (1975) 303-330.
- NIEVA FENOLL, J., *La razón de ser de la presunción de inocencia*, *InDret*, n. 1,
2016: <https://ssrn.com/abstract=2737834>. Última consulta, 1-IX-2021.
- NOVAL, J., *Commentarium Codicis Iuris Canonici*, L. IV: *de processibus, pars
prima: de iudiciis*, Petri Marietti Editoris, Augustae Taurinorum-
Romae 1920.
- PALESTRO, V., *Le sentenze penali della Rota Romana (1909-1996)*, en
Z. SUCHECKI (ed.), *Il processo penale canonico*, Lateran University
Press, Roma 2003, 325-364.
- PAPALE, C., *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Ca-
nonico Libro VII, Parte IV*, Urbaniana University Press, Città del Va-
ticano 2012.
- PENNINTONG, K., *Innocente fino a prova contraria: le origini de una mas-
sima giuridica*, en D. CITO (ed.), *Processo penale e tutela dei diritti
nell'ordinamento canonico*, Giuffrè editore, Milano 2005, 33-61.
- PEÑA GARCÍA, C., *Defensores del vínculo y patronos de las partes en las cau-
sas de nulidad matrimonial: consideraciones sobre el principio de igualdad de
partes públicas y privadas en el proceso*, *Ius Ecclesiae* 21 (2009) 349-366.
- PIÓ XII, *Allocuzione alla Rota Romana*, 3-X-1941, AAS 33 (1941) 421-426.
- PIÓ XII, *Allocuzione alla Rota Romana*, 1-X-1942, AAS 34 (1942) 338-343.
- PIÓ XII, *Allocutio ii qui interfuerunt VI^o Conventui internationali de iure
poenali*, 3-X-1953, AAS 45 (1953) 730-744.
- PIÓ XII, *Nuntia iis qui interfuerunt VI^o Conventui nationali Sodalium Con-
sotiationis ex iuris peritis catholicis Italiae*, 5-X-1954, AAS 47 (1955) 60-
71.
- POLO, L., *La persona humana y su crecimiento*, en IDEM, *Obras completas
de Leonardo Polo*, serie A, vol. XIII, Eunsa, Pamplona 2015, 19-185.

- RAMOS, F., *I tribunali ecclesiastici, costituzione, organizzazione, norme processuali, cause matrimoniali*, 2.^a ed., Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino, Millenium Romae 2000.
- ROBERTI, F., *De processibus*, II, apud aedes Facultatis Iuridicae ad S. Apollinaris, Romae 1926.
- RODRÍGUEZ-OCAÑA, R., *La participación del promotor de justicia en los procesos contenciosos*, *Fidelium Iura* 7 (1997) 247-285.
- RODRÍGUEZ-OCAÑA, R., *sub cc. 1598 y 1604*, en Á. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, IV/2, 3.^a ed., Eunsa, Pamplona 2002.
- ROHATGI, V., *Statistical Inference*, Dover Publications, New York 2003.
- ROSALES PEDRERO, S. M.^a, *La protección de testigos en el proceso penal*, *Revista Foro FICP (Tribuna y Boletín de la FICP)* 2017-2, 526-540: <https://bit.ly/3k0vntt>. Última consulta, 1-IX-2021.
- SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Instr. *Accioche più fundatamente*, 17-VII-1627, en J. PIGNATELLI, *Consultationes canonicae in quibus praecipuae controversiae*, t. I, Sumpt. Gabrielis & Samuelis de Tournes, Coloniae Allobrogum 1718, 127-128.
- SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Instr. *La santità*, 23-III-1726, en U. GIRALDI, *Expositio Iuris Pontifici iuxta recentiore[m] Ecclesiae disciplinam in duas partes distributa*, t. II: Pars prima tomus secundus. Apud Dominicum Ercole, Romae 1830, 642-643.
- SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Instr. *Quae Supremus Pontifex*, 20-II-1867, ASS (1867-1868) 499-505.
- SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Instr. *Crimen sollicitationis*, de modo procedendi in causis sollicitationis, Typis Polygotis Vaticanis 1962.
- SÁNCHEZ, Th., *De sancto matrimonii sacramento disputationum*, tomi tres, t. I, apud Benedictum Milochum, Venetiis 1672.
- SÁNCHEZ-GIL, A. S., *El principio 'in dubio pro reo' en el derecho penal canónico. La permanente actualidad de una antigua regla jurídica*, *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, n. 5, mayo de 2004: <https://bit.ly/3gmlJkB>. Última consulta, 1-IX-2021.
- SÁNCHEZ-GIRÓN, J. L., *Algunos interrogantes en la disciplina codicial sobre la prescripción de la acción criminal*, en J. KOWAL – J. LLOBELL (eds.),

- «*Iustitia et iudicium*» *studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, vol. IV, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, 2167-2185.
- SANCINETTI, M. A., *Testimonio único y principio de la duda*, InDret 3 (2013): <https://bit.ly/3e8xnwD>. Última consulta, 1-IX-2021.
- SCHOUPPE, J. P., *sub c. 1526*, en Á. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, IV/2, 3.^a ed., Eunsa, Pamplona 2002.
- SCICLUNA, Ch. J., *Delicta graviora ius processuale*, en ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (ed.), *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012, 79-94.
- SERRANO RUIZ, J. M.^a, *Una discutible cuestión procesal: los conocimientos personales del juez en la instrucción del juicio*, en F. R. AZNAR GIL (ed.), *Estudios de derecho matrimonial y procesal en homenaje al Prof. Dr. D. Juan Luis Acebal Luján*, Publicaciones Universidad de Salamanca, Salamanca 1999, 235-244.
- STANKIEWICZ, A., *Le caratteristiche del sistema probatorio canonico*, *Apollinaris* 67 (1994) 89-122.
- STEIN, F., *El conocimiento privado del juez: investigaciones sobre el derecho probatorio en ambos procesos*, Eunsa, Pamplona 1973.
- STUMER, A., *La presunción de inocencia. Perspectiva desde el derecho probatorio y los derechos humanos*, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-São Paulo 2018.
- TARUFFO, M., *Algunas consideraciones sobre la relación entre prueba y verdad*, *Discusiones: prueba y conocimiento* 3 (2003): <https://bit.ly/3s4Mpu8>. Última consulta, 1-IX-2021.
- TARUFFO, M., *Simplemente la verdad. El juez y la reconstrucción de los hechos*, Marcial Pons, Barcelona 2010, 115.
- TILLERS, P. – GREEN, E. (eds.), *Probability and Inference in the Law of Evidence: the uses and limits of Bayesianism*, Boston Studies in the Philosophy and History of Science, n. 109, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London 1988.
- VARO, F., *Elementos antropológicos y éticos en el derecho penal de la Biblia Hebraea*, *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos* 42 (2020) 67-93.

- VERA SÁNCHEZ, J. S., *La discrecionalidad judicial en dos enfoques reglados de la valoración de la prueba penal*, Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid 30 (2014) 247-269.
- VILLEGGIANTE, S., *Il principio del contraddittorio nella fase di costituzione del processo ordinario per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, en Z. GROCHOLEWSKI – V. CÁRCEL ORTI (eds.), *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1984, 349-361.
- WERNZ, F. X. – VIDAL, P., *Ius canonicum*, VI, apud aedes Universitatis Gregoriana, Romae 1927.
- ZAMORA-ACEBEDO, M., *La búsqueda de la verdad en el proceso penal*, Acta Académica 54 (2014) 147-186.